

ABC SÁBADO, 23 DE MARZO DE 2024

CASTILLA Y LEÓN 15

La CHD admite ante las críticas que limita «bastante» la limpieza de los ríos

► Se abre a «flexibilizar», pero se justifica frente a las quejas de los regantes: «No sancionar a los incumplidores es en perjuicio de los que cumplen»

ISABEL JIMENO
VALLADOLID

Tras un año seco, un par de episodios de lluvias abundantes llevaron al desbordamiento de muchos ríos en Castilla y León —se pidió la declaración en las zonas afectadas de Ávila, Segovia, Soria y Valladolid—, con cauces también de arroyos y caceras que anegaron caminos y tierras de labor, causando «pérdidas impresionantes». Precisamente una de las quejas que ayer sacaron a la calle en Valladolid a unos doscientos agricultores a pie y una veintena de tractores llegados también de Zamora, Avila o Segovia para protestar en «contra las políticas y represión que «desde hace bastantes años», aseguran, están sufriendo por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Un organismo «decimonónico», se quejaron, del que lamentaron su tardanza e incluso falta de respuesta y «dejación de funciones» por ni limpiar ni dejar hacerlo. «Restringimos bastante las limpiezas», reconoció la comisaria de Aguas, Diana Martín, quien defendió que «muchas veces» la concepción que se tiene de lo que son ríos y arroyo «difiere» de la que tiene el organismo y el Ministerio de Transición Ecológica, del que depende. Y tras asumir que es «cierto que no somos del todo ágiles» se comprometió a que intentar «flexibilizar» su proceder y unas restricciones ambientales, incidió, que «no se necesitarían si no se hubiera constreñido el espacio de los ríos durante 30 años».

«Por cualquier incumplimiento se nos sanciona, pero sus incumplimientos no tienen repercusión» y no se peñan los daños, criticó Valentín García, el líder de UCCL en Valladolid. Precisamente que ven «muy represivo, sancionador y recaudador» a un ente «siempre con amenazas, sanciones y multas» de «hasta 20.000 euros» fue otro de los motivos que alentaron la tractorada, convocada por Asaja y a la que se sumaron el resto de organizaciones agrarias y también los grupos independientes.

«No funciona»

Sin más banderas que la de España, tras la pancarta «Nuestro futuro depende del agua» y justo en el día mundial que reivindica la importancia del líquido elemento, llevaron hasta la CHD una docena de propuestas-protesta consensuadas que «podían ser

más». Se las lograron enseñar en persona a su presidenta, María Jesús Lafuente, quien finalmente se reunió durante unos 40 minutos con los representantes del sector en su despacho, por más que en la calle se empenaron sin éxito en reclamar que bajara a escuchar sus reivindicación. Al son de las bocinas, la reivindicación llegaron también a la Delegación del Gobierno y a la Consejería de Medio Am-

biente, pero su principal objetivo era la CHD, dejaron claro.

El actual Plan Hidrológico del Duero vigente hasta 2027 —que organizaciones agrarias y Junta de Castilla y León no firmaron— «no funciona» pues «cada vez hay menos disponibilidad, más problemas para regar y más sanciones», subrayó el presidente de Asaja Valladolid, Juan Ramón Alonso. «No sirve para nada», recalcó. Por lo que exigieron uno nuevo. «Algunas» de sus reivindicaciones se «tendrán en cuenta» de cara al siguiente, apuntó Lafuente, quien también se abrió a asimilar «algunos» de los planteamientos, «pero no todos» podrán hacerse efectivos por limitaciones legales, precisó.

«No podemos seguir sufriendo san-

ciones», reclamó también David Garrido, líder provincia de COAG, quien aseguró que esas multas suponen «verdaderos quebraderos» para los agricultores. «Sin regadío la gente se queda en los pueblos», advirtió. «Nos trata como a delincuentes», cuestionó Valentín García, quien censuró la «clara animadversión» que ven desde este órgano dependientes del Ministerio.

«Siendo benévolo»

Precisamente sobre las sanciones, la presidenta de la CHD aseguró que «se está siendo benévolo» al tener en cuenta las alegaciones. La cuantía, apuntó, se fija una vez calificada y sobre el cálculo del daño ocasionado. Eso sí, en el caso de aguas subterráneas, se multiplica por 1,6, lo que si eleva notablemente el monto. «Pero no podemos dar carta de naturaleza al incumplimiento», apostilló Lafuente, descartando así la reclamación de los regantes de anulación, archivo y paralización de los expedientes sancionadores por ejemplo en casos en los que demuestren que no se han excedido en el uso de la concesión. Si bien la presidenta reconoció que «casi todos» se ciñen a lo marcado, «no sancionar a los incumplidores es un perjuicio para los que cumplen», recalcó Lafuente.

Además, la máxima responsable del organismo defendió que la Confederación «siempre trabaja en contacto directo» con los agricultores y tiene en cuenta sus opiniones. Pese a la queja, coincidieron los manifestantes, de la falta de diálogo, por lo que entre la reivindicaciones plantean una mesa de negociación con los regantes.



Arriba, reunión con la presidenta de la CHD. Abajo, protesta de los agricultores contra la Confederación // EFE/ICAL

12 | VALLADOLID |

La falta de seguridad deja sin riego a 600 propietarios del canal Macías Picavea

Desde hace tres años las averías son constantes en la tubería central de la infraestructura que afecta a Rioseco, Tordehumos, Villabrágima y Villagarçia

SILVIA G. ROJO

VALLADOLID. Los 600 propietarios de la Comunidad de Regantes Canal Macías Picavea no dispondrán de agua esta campaña. La noticia es así de clara y directa, otra cuestión es qué ha motivado que los agricultores de Tordehumos, Villabrágima, Medina de Rioseco y Villagarçia de Campos, municipios por los que transcurre la infraestructura, hayan decidido suspender la campaña de riego que, de manera oficial, comienza el 1 de abril.

«Hemos decidido suspenderla, por mayoría absoluta, debido al estado del canal», confirmó el presidente Luis Real, tras la celebración de la asamblea general extraordinaria en la que se aprobó la medida. «Tenemos un informe de la Guardia Civil, de seguridad vial, en el que se nos dice que no es seguro y puede ocurrir una desgracia porque la tubería pasa por carreteras y además, el seguro ya no quiere saber nada porque han dejado de ser daños imprevisibles y accidentales».

La cuestión es que la tubería central de este canal no deja de dar averías, con inundación incluida de la carretera de Medina de Rioseco hasta en un par de ocasiones el año pasado, y «es más que previsible que si arrancamos la tubería va a reventar porque este invierno ha sucedido hasta en tres ocasiones en es-

tática» o, dicho de otro modo, por la propia presión del agua en reposo.

Modernización en 2005

La modernización de este canal se produjo en el año 2005, aunque en la zona se lleva regando desde el año 1959, y es la tubería central de unos 18 kilómetros la que no deja desde hace unos tres años de causar problemas. «Esa tubería es de propiedad estatal, de Seisa (Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias), y ahora no se hacen responsables cuando tienen la obligación durante 50 años», afirma Luis Real, «fuimos de los pri-

meros en modernizarnos y ahora nos está tocando pagar todas las novatadas».

Según las palabras del propio Real, «tenemos un informe pericial y el problema viene por una fallo en la ejecución de la obra», que puede resumirse en que esa tubería, de fibra de vidrio, debería estar asentada en grava y no lo está por lo que en la parte de abajo se producen las roturas. «Seisa nos tiene que dar servicio, queremos que nos den una respuesta que no llega, y al final nos va a tocar reclamar judicialmente».

De este canal dependen 2.400 hectáreas, entre las que se incluyen las de Lourdes Pérez, una

agricultora de Villabrágima. En poco más de un año estará jubilada, pero su explotación está pensada para que su hijo tome el relevo generacional. «Tengo 16 hectáreas de regadío propias y he cogido otras 10 hectáreas en una subasta porque mi proyecto era que además de las siete hectáreas que tenía de remolacha sumar esas diez más y ampliar la medida agroambiental». En el caso de la remolacha está sujeta a diversas ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) pero el cobro de las mismas está vinculado al mantenimiento del cultivo durante una serie de años. «He estado en la Junta y tengo una ca-

rencia de un año pero si esto se estira dos años no hay flexibilidad y perderemos contratos y las ayudas, lo que se traduce en euros, una ruina total».

Lourdes recuerda que esta comunidad todavía tiene por delante muchos años para finalizar los pagos de la modernización, según sus datos deben un millón de euros a una entidad bancaria y ocho millones a Seisa. «No tenemos para regar porque la tubería está rota y todavía debemos esos millones». Con este panorama, sin una solución a la vista, Lourdes se pregunta «¿qué futuro le voy a dejar a mi hijo? Esto es meterlo en la ruina y eso que todavía no está hipotecado».

Secano en tierras de regadío

El uso que dará este año a esas hectáreas todavía no lo tiene claro, «cebada y trigo ya no se puede, tendría que ser girasol o garbanzos y como girasol sé que no, pues irán de garbanzos, de barbecho o de ruina».

Y es que claro, no tienen nada que ver la rentabilidad de cultivos que están pensados para el secano que cultivos propios de regadío como la remolacha, el maíz o las patatas, cuya rentabilidad es mucho más elevada y sirve para hacer frente a otra serie de gastos como puede ser el pago de la modernización en la que una parte asumen las administraciones y otras los comuneros.

Alberto Fernández, otro propietario de Villagarçia de Campos, reconoce la faena que supone no regar para muchos jóvenes como él, «hemos montado el regadío, gracias a eso muchos nos estamos quedando en los pueblos, pero vienen dos años como este y a ver qué haemos, tenemos que pagar el regadío, las rentas y no podemos regar».

Los regantes del Macías Picavea protagonizaron una tracturada frente a la sede de Seisa en Valladolid el pasado 15 de febrero para que la entidad haga caso de sus reivindicaciones.



Algunos de los regantes del canal Macías Picavea posan junto a un pivó en una de las tierras. M. G. MARBÁN

Quince tractores recorren el centro para reivindicar el refuerzo de los regadíos

Los agricultores registran en la CHD, la Delegación y la Consejería de Agricultura doce medidas de impulso a los regadíos

ÁLVARO MUÑOZ

VALLADOLID. El reloj inteligente del inspector de la Policía Local David Silván estará en estos momentos enchufado a la corriente. Le toca recargar el artilugio después de una intensa mañana por las calles de Valladolid en la que acumuló pasos y más pasos, además de disparar el quemador de

calorías. Silván fue en todo momento, en esta enésima tracturada (convocada por Asaja), el que encabezó a pie la marcha con la intención de que nada ni nadie se desviara. Era más fácil que en otras ocasiones, porque en esta ocasión un servidor contabilizó quince tractores y alrededor de un centenar de manifestantes a pie. Portaban sus tradicionales pancartas de la necesidad del campo para vivir, aunque en esta ocasión, en este Viernes de Dolores a la par que el Día del Agua, este era el tema central. Así que en la diana, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Y con esa premisa arrancó la manifestación en la plaza de Colón. Tras superar Muro, los convocados en esta jornada se toparon con la dificultad inicial de no poder acercarse al edificio de la CHD. Estaba blindada por la Policía Nacional y allí no se aproximaba nadie. Tras arduas negociaciones a los que iban a pie se les permitió tal objetivo, mientras los representantes sindicales accedían al interior. Registraron su plan de acción y fueron recibidos por la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente. El encuentro duró más de media hora. Se abordaron los doce puntos



Cabeza de la manifestación a su paso por Miguel Íscar. CARLOS ESPESO

para dejar el resumen, en voz de la representante de la cuenca, que «en algunos podemos hacer algo». Se les escuchó en la CHD y retomaron su recorrido. Al son de las bocinas y algunos aplau-

sos de los ciudadanos, los tractores avanzaban hasta la Delegación del Gobierno de Castilla y León para aterrizar definitivamente en la Consejería de Agricultura y Ganadería.

CASTILLA Y LEÓN



Hilera de tractores pasando por la calle Miguel Iscar. ICAL



Tractorada en Valladolid. PHOTOGENIC



Los manifestantes detrás de una pancarta. PHOTOGENIC

REGANTES DE MACÍAS PICAVEA PARAN EL RIEGO

La comunidad de regantes Macías Picavea, en la zona vallisoletana de Medina de Rioseco, decidió, en la Junta General Extraordinaria celebrada este jueves, suspender la campaña de riego para el año 2024 "de forma definitiva e indefinida" debido al "sentimiento y sensación de abandono" de la que acusan a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), y pese a las "desastrosas consecuencias económicas que esto supone para la comarca y para las más de 600 familias de agricultores y ganaderos cuyos ingresos provienen del regadío". La comunidad de regantes Macías Picavea solicitó, no obstante, que Seiasa "realice las actuaciones necesarias para establecer y garantizar el servicio de riego como responsable y propietario de la infraestructura", informa Ical.

Los tractores 'procesionan' contra la CHD

La Confederación asegura que tendrá en cuenta las peticiones de regantes y agricultores para intentar flexibilizar las limpiezas fluviales pero no las sanciones

MIGUEL Á. CONDE VALLADOLID
En su particular forma de iniciar la Semana Santa, una nueva tractorada 'procesionó' por las calles de Valladolid el pasado viernes, esta vez para pedir a la Confederación Hidrológica del Duero una mejor gestión de las aguas de la cuenca. Uno de los objetivos del recorrido fue la CHD, la cual contestó a los manifestantes que flexibilizaría una de las demandas más sonadas de los agricultores, las limpiezas fluviales, y que tendrían en cuenta sus propuestas, aunque no suavizarían las sanciones. En torno a una veintena de tractores y más de cien manifestantes a pie tomaron las calles en un nuevo intento de que las instituciones es-

cucharan sus peticiones.

La presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente se reunió con los organizadores de la manifestación y representantes de las diferentes asociaciones agrarias presentes en la movilización. En dicho encuentro, los agricultores expusieron 12 puntos creados por Asaja en colaboración con regantes y equipos de personas conocedoras del plan hidrológico. Tras la reunión, Lafuente, en declaraciones realizadas a medios aseguró que habían "escuchado todas sus demandas". "Nos han leído todos los puntos. Hemos estado dialogando sobre todos, en algunos sí que podremos hacer algo. Tener en cuenta, lo tendremos toso. Nosotros estamos li-

mitados por la legalidad y hay cosas que no se podrá hacer", afirmó Lafuente.

Una de las exigencias más destacadas de los agricultores es la rebaja de las sanciones que la CHD pone a los incumplidores del plan hidrológico. Motivo de ello, aseguró desde UCCL Valentín García que, refiriéndose a la Confederación, «nos está tratando a los agricultores como delincuentes», y acusa a la CHD de «dejación de funciones» al no contestar sus peticiones en cuanto a las limpiezas fluviales y a la paralización de expedientes.

Desde la CHD, Lafuente afirmó que, en relación a los expedientes y sanciones, «no podemos olvidar que no podemos dar carta de na-

turalidad al incumplimiento porque eso va en contra de los cumplidores», y añade que «casi todas cumplen». Sin embargo, los agricultores visibilizan su malestar por el plan hidrológico. Desde Asaja Valladolid, Juan Ramón Alonso García recriminó a la CHD que «no se pueden poner sanciones como las que se están poniendo de 10 mil, 15 mil euros». Afirma que llamadas Cuas (comunidades de usuarios de aguas subterráneas) «eran una solución, no están funcionando, los agricultores tienen más problemas para regar y hay mas sanciones».

La CHD ha recordado que, aunque tenga en cuenta las demandas de los agricultores y regantes, el plan hidrológico «se revisa cada

cinco años y de momento este está vigente hasta el 27», afirmó Diana Martín, comisaria de Aguas. Martín también añadió que «si que podemos tener en cuenta algunas de sus demandas para la elaboración del próximo plan», lo que significa que los agricultores tendrán que esperar a la finalización del vigente, cuya vida útil acabará el próximo año 2027, como indicaba Martín, y tendrá que revisarse para que las peticiones de los agricultores puedan tener cabida en el plan.

De esta manera, y aunque algunos de los cambios exigidos por los agricultores puedan llegar a buen puerto, el mayor desacuerdo entre agricultores y CHD, proveniente del propio plan hidrológico, tendrá que esperar para solucionarse.

En cuanto a la Mesa de Regantes pedida por los agricultores, la CHD no dio una respuesta a si se va a crear o no. La presidenta aseguró sobre este tema que «no lo hemos estudiado».

LARAZÓN • Sábado, 23 de marzo de 2024

Castilla y León reclama mejoras en la regulación de los embalses

► Suárez-Quiñones apuesta por «más eficacia en el uso del agua»



El consejero en el homenaje a Ángel González Quintanilla en León

Pedro Alonso. LEÓN

La Junta ha solicitado mejoras en la regulación de embalses y de los pantanos con el fin de ser más eficientes en el uso del agua. Es lo que ha reclamado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su participación en el homenaje al que fuera presidente de la Federación de las Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero, Ferduero y del Sindicato Central del Embalse de los Barrios de Luna, Ángel González Quintanilla.

Allí, el consejero ha considerado esencial «no parar el desarrollo del regadío» al señalar que «es clave para la productividad de la renta

agraria y de la modernización y transmisión de las explotaciones a las generaciones de jóvenes y la incorporación de la mujer».

Es por ello, que Suárez-Quiñones ha apostado por «trabajar para ser mucho más eficientes» y ha resaltado que Castilla y León se ha convertido en un ejemplo en la gestión de regadíos, con unas 450.000 hectáreas en la actualidad y con la pretensión de alcanzar el millón, con el fin de pasar del 12 al 22 por ciento de la superficie cultivable.

El consejero también ha anunciado que se presentará próximamente un plan con las diputaciones provinciales, que contará con «una importante inversión» para eliminar las pérdidas de red que hay en los pueblos y la digitaliza-

ción del suministro de agua potable que permita «menos pérdidas de agua y más eficiencia en el uso del recurso».

El consejero hizo alusión a los regadíos, respecto a los que la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural puede alcanzar en esta legislatura los 200 millones de euros de inversión. A ello sumó que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio lleva a cabo actuaciones con unos 450 millones de euros para llevar a cabo mejoras en los abastecimientos de aguas de las localidades en búsqueda de eficiencia.

De esta forma, la rama dirigida por Suárez-Quiñones, trabaja en la limpieza de las aguas residuales que van a los ríos de la Comunidad para «conseguir la cifra de cero en los ríos» y construir «entorno a 1.300 o 1.400 depuradoras en Castilla y León», muchas de las cuales «ya están en ejecución y algunas ya están inauguradas».

Respecto al homenajeado, Suárez-Quiñones ha manifestado que Ángel González Quintanilla ha sido «una pieza clave en el desarrollo de los regadíos en la provincia de León, así como una referencia a nivel regional».

El propio González Quintanilla, durante su intervención, ha pedido «que a ver si entre todos conseguimos que esta cuenca, en la provincia leonesa, cuente con más regulaciones que las que en estos momentos existen».

Bruselas propone aranceles del 50% a las exportaciones de cereal ruso

La medida quiere evitar que el Kremlin desestabilice el mercado comunitario

Lidia Montes BRUSELAS

En el marco de las protestas del campo que en las últimas semanas han protagonizado movilizaciones en las capitales europeas Bruselas eleva la presión económica sobre Moscú. Lo hace con la aplicación de aranceles adicionales. La Comisión Europea propuso ayer que se eleven al 50% los aranceles que se aplican a la exportación de cereales, oleaginosas y productos derivados procedentes de Rusia y Bielorrusia a la UE.

Este incremento de la imposición arancelaria afectará a productos como trigo, maíz y la harina de cereales. Los aranceles aumentarían, en casi todos los casos, a 95 euros por tonelada o a un porcentaje del 50% sobre el valor del producto. Y es que las importaciones de estos bienes desde Moscú no solo no habían sido inscritas en ningún paquete de sanciones, sino que su tarifa arancelaria era del 0%.

Explicó la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en rueda de prensa tras la primera jornada de la Cumbre de líderes de la UE que la intención tras esta medida es evitar que Moscú "pueda desestabilizar el mercado único con sus productos, también evitar que pueda utilizar los beneficios de las exportaciones de estos bienes y evitar que el grano ucraniano robado no entre a la UE".

Según los datos de la Comisión Europea, las exportaciones de cereales de Rusia a la UE se elevaron a 4,2 millones de toneladas en 2023, con un valor de 1.300 millones de euros. En el caso de Bielorrusia, incluida en la medida para evitar que el Kremlin pueda esquivar la imposición arancelaria, las exportaciones a la UE se elevaron a 610.000 toneladas, con un valor de 246 millones de euros. Fuentes comunitarias



El líder ruso, Vladimir Putin. EFE

han indicado que el cereal ruso representa tan solo el 1% del total de importaciones de cereal del bloque.

La medida llega en un momento en el que las protestas del campo han sacudido la política en Bruselas en las últimas semanas. La crisis energética y el aumento de los

costes de producción no han sido los únicos catalizadores de las protestas. La liberalización de las exportaciones de cereal ucraniano a la UE ha generado malestar entre los agricultores, especialmente de los países fronterizos, que han visto depreciada su producción local

5
MILLONES

La medida supondrá una reducción de las importaciones de cereales procedentes de Rusia y Bielorrusia de cerca de 5 millones de toneladas al año. Este déficit de suministro se cubrirá con la producción interna de la UE y beneficiará a los agricultores comunitarios. Además, se espera que el déficit se cubra parcialmente con importaciones de terceros países, como Estados Unidos, Brasil, Ucrania, Serbia o Argentina.

ante el excedente en el mercado derivado de la llegada de productos de Kiev.

Tras la amenaza de veto a las exportaciones de cereal ucraniano esgrimida por Hungría, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia y Rumanía, esta misma semana Bruselas daba un paso atrás sobre el levantamiento arancelario al grano ucraniano, vigente hasta 2025, y fijaba ciertas líneas rojas a modo de salvaguardia para los casos en los que el mercado comunitario se viera perjudicado.

La medida incluye aranceles a las exportaciones, aunque la UE podrá seguir articulándose como territorio de paso para la circulación de estos bienes a terceros países. El incremento de aranceles se aplicará también a Bielorrusia, considerando los estrechos vínculos políticos y económicos del país con Rusia. Además, al incluir a Bielorrusia en la medida, la UE impedirá que Rusia utilice a Bielorrusia como vía para esquivar los aranceles y canalizar sus mercancías a la UE.

32 ECONOMÍA

El desplome del consumo de pescado alerta al sector: «El precio no es lo único que influye»

► Las compras de este alimento registraron una caída del 15,6% durante 2022

NEREA SAN ESTEBAN
MADRID

El consumo de pescado continúa en caída libre. La alerta en el sector, que hace unas semanas llegó incluso a unirse al campo en sus protestas, es alta. En 2022, último ejercicio completo del que hay datos, el sector acumulaba una caída del 15,6% de sus compras, de manera «generalizada y transversal» en todos sus segmentos.

Así se recoge en el Informe de Consumo Alimentario que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que registra este descenso en pescados, tanto frescos como congelados, y en conservas. En concreto, a cierre del año el consumo en 2022 se situaba en 19,19 kg por persona al año, con un descenso del 15,5% respecto a 2021. No obstante, si se analiza la evolución de 2023 hasta noviembre, la tendencia sigue apuntando a la caída: se detecta contracción en la compra de productos pesqueros (4%) por «un menor consumo» que afecta a todos los segmentos, tanto a pescados (2,3%), como de mariscos, moluscos, crustáceos (8,6%) y a conservas de pescado y molusco (2,4%), recoge Agricultura. De diciembre de 2022 a noviembre de 2023, dentro de los pescados la evolución es desfavorable tanto para los pescados frescos, que pierden el 1,5%, como para congelados, que acumulan un 5,7% de pérdida de volumen. Con impacto en el comercio: «Estimamos que, de casi 15.000 pescaderías en 2007, estaremos ahora en torno a las 10.000», resume la directora general de Fedepesca, María Luisa Álvarez.

Cada vez se compra menos pescado, y las empresas del sector dan por hecho que la razón no está solo en el precio: «En España se comercializa una enorme variedad de especies de pescados y hay para todos los bolsillos, de modo que el precio no es el único factor que influye en el consumo», cuentan desde la patronal Cepesca. Su presidente, Javier Garat, analiza el presente: «Cada vez hay menos pescaderías y hay menos pescaderos, porque no salen las cuentas». Y apunta a dos factores clave: el cambio de hábitos de los consumidores y el descenso de la promoción por parte del Gobierno.

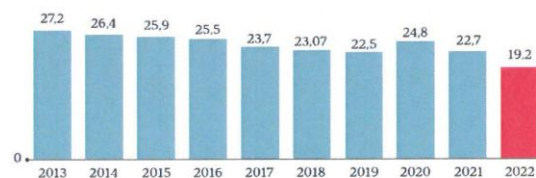
Para la patronal pesquera, la desaparición hace doce años del FROM, organismo autónomo dependiente de Agricultura que dedicaba cada año en



Un puesto de pescadería en un mercado de Lugo // EFE

Consumo de pescado por persona y año

En kg / Per cápita



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

ABC

tre 8 y 10 millones de euros a la promoción del consumo responsable de productos pesqueros (recordará el lector la campaña de «Pezqueñines no, gracias»), fue uno de los primeros golpes que sufrió el sector. «Las competencias las asumió la Dirección General de Alimentación, y la cantidad destinada a promoción se redujo considerablemente. Aunque ha aumentado en los últimos años, no se acerca a los números de entonces», apunta Garat.

Excluido el pescado de la rebaja del IVA puesta en marcha por el Gobierno para algunos alimentos, el sector pesquero considera que esto ha podido influir en la caída del consumo que registran mes a mes, derivada de la «percepción» del consumidor, pero no consideran que haya sido determinante. Francisco Abad atiende por teléfono a ABC desde su pescadería, en el mercado El Deleite (Madrid). A sus 60

De casi 15.000 pescaderías que había en 2007, hoy solo quedan unas 10.000, advierte la directora general de Fedepesca

años, lleva 46 trabajando en el sector, desde que a los 14 comenzó a dedicarse a pequeños repartos en el negocio que hoy regenta, entonces de su padre. «El pescado es un producto de los que mejor se han mantenido en precio estos meses respecto a los de primera necesidad. Si es cierto que hay artículos que han ido cambiando porque salen menos y se han convertido en productos de lujo, como el besugo, pero normalmente, si te acomodas a la temporada (ahora caballa, sardina...) está bien de precio. No se puede querer bonito todo el año», cuenta el también presidente de Fedepesca, que representa al pequeño comercio dedicado a este sector.

La necesidad de incrementar la promoción del Gobierno sobre el pescado fue una de las principales reclamaciones que las patronales pusieron ayer sobre la mesa del ministro Luis Planas, que se comprometió a reforzarla. Lo hizo en un encuentro en el que el sector también solicitó de nuevo ser incluido en la rebaja del IVA, un «cambio de rumbo» de las políticas europeas tanto pesqueras como medioambientales: «Están poniendo al límite al sector», dijo Garat tras el encuentro.

En portada

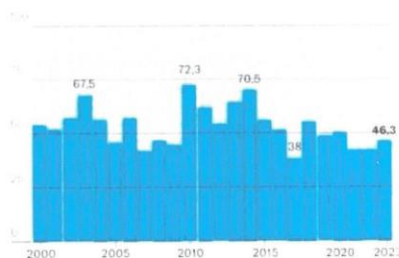
Aguas embalsada que se pierden como si abundaran

La insuficiente reutilización de los recursos hídricos, una gestión pública desordenada e ineficiente y la falta de inversión agudizan la escasez crónica

Balance de la actividad hídrica en España

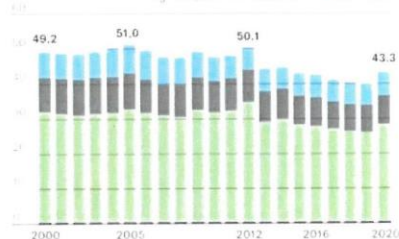
Evolución del agua embalsada en España

Sobre la capacidad de las reservas. En la semana 51 del año.



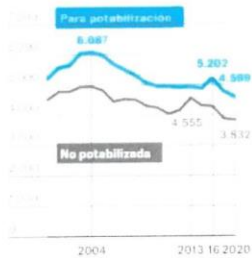
Nivel de estrés hídrico

Extracción de agua dulce como % de los recursos de agua dulce disponibles.



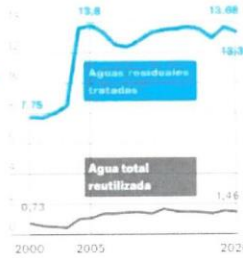
Volumen de agua disponible

Millones de m³.



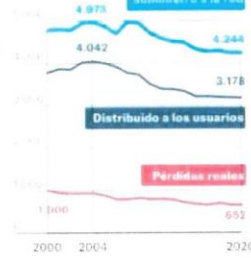
Volumen de agua tratada y reutilizada

Millones de m³/día. En España.



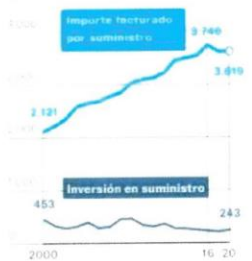
Volumen de agua suministrada

En millones de m³.



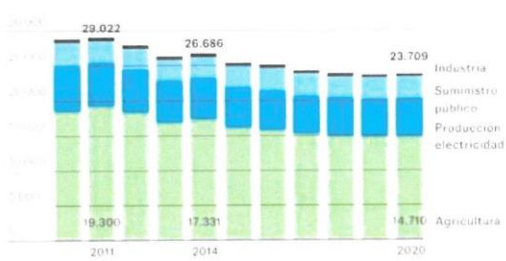
Importe de agua suministrada

En millones de euros.



Extracción de agua por sectores

En millones de m³.



Fuente: Asaja con datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, FAD de informe del INE (suministro y saneamiento del agua) y de Eurostat.

El PAÍS

Denisse Cepeda

Lleve menos, es obvio. También influye el cambio climático. Pero a la disminución de las precipitaciones o sequía meteorológica —como se le conoce—, se suman las problemáticas de gestión y gobernanza que hacen que en España se exacerbe el riesgo de sed extrema, sobre todo en el Mediterráneo y sur del país. Si bien la falta de agua no es algo nuevo, ha ocurrido periódicamente (cada 10 o 12 años), ahora se dispara la alerta por un déficit hídrico estructural, en vez de coyuntural, debido a los episodios de escasez cada vez más frecuentes, intensos y duraderos.

En los últimos tres años persiste una dorsal de aire cálido subtropical sobre nuestro territorio que se mantiene durante mucho tiempo prácticamente inmovil, y que afecta también a Canarias e islas Baleares. Cuando se ve debilitada, se produce en descolgamientos, es decir, vaguadas y danas que dejan lluvias en el noroeste, la vertiente atlántica, y no

en todo el país", explica José Miguel Vinas, físico y meteorólogo de Meteored. A este patrón cada vez más recurrente se le añaden las altas temperaturas, que están por encima de lo normal en pleno invierno, en una media de 1,52 grados respecto de los niveles preindustriales, y que provocan una mayor evaporación del recurso almacenado en embalses y pantanos, agrega.

Así, desde el inicio del año hidrológico —el pasado 1 de octubre— hasta el 20 de febrero (cuando se recopilaron los datos), el promedio de precipitaciones para toda España fue de 319 milímetros, un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior, señala Vinas. Pero si se analizan los datos por regiones, en Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña están un 25% por debajo de lo normal, advierte. Canarias está también en el punto de mira.

En 2023 esa cifra se situó en 301 milímetros, lo que supone una caída del 9%. Aunque la mayor disminución se produjo en 2022 tras alcanzar apenas los 200, una reducción del 41%. "Ahí es cuando se empezó a gestar el episodio de sequía actual", recalca Vinas, quien

alerta además de que los modelos climáticos pronostican un recorte anual de las lluvias de entre un 10% y un 30%.

Tamando del Moral, catedrático de la Universidad de Sevilla, apunta que ese fenómeno de elevadas temperaturas y cambios en la distribución, duración e intensidad de los aguaceros está reduciendo la escorrentía: la fracción de la precipitación que se transforma en flujos de agua superficial o recarga de acuíferos. "El caso más significativo es el de la cuenca del Guadalete-Barbate (Cádiz), donde la disminución del 5% o del 10% de lluvias está dando lugar a un recorte del 50% en las aportaciones a los embalses de la cuenca".

Desertificación real
Carlos Garriga, director de We Are Water Foundation, recuerda que el 74% del territorio español se encuentra en riesgo de desertificación y que algunas regiones del sureste tienen una amenaza muy alta de padecerlo. "La mayor parte pertenece a la categoría de tierras secas (aquellas que tienen un índice de aridez menor de 0,65) y la vertiente mediterránea entra en la de semiárida

(con un valor de entre 0,5 y 0,2)", detalla, con datos de Ministerio de Transición Ecológica y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Para Andrés Molina Giménez, director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, España sufre ya escasez —y de manera estructural en algunas demarcaciones hidrográficas— incluso sin los efectos del calentamiento global. "Esto solo agudiza la situación; los problemas de gestión y gobernanza vienen de antes y van a seguir", lamenta.

Dejadas a un lado la cuestión climática y la geomorfología, entra en juego cómo equilibrar oferta y demanda. "En Cataluña llevamos 40 meses prácticamente sin lluvias o con muy pocas. Mientras que las necesidades de agua aumentaron en los últimos años por el crecimiento de la población y del consumo turístico", indica Xavier Sánchez Vila, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña. Pero no solo el turismo está ahora en el foco, especialmente en las zonas costeras, también "la expansión del regadío en agri

AGUA Y BOSQUES

EL PAÍS, VIERNES 22 DE MARZO DE 2024 3

En portada

La intensidad de las lluvias hace que cada vez menos cantidad se transforme en agua superficial o de recarga de los acuíferos

El manejo en el territorio español es complejo en lo administrativo, en lo competencial y en lo regulatorio

Las fugas y el derroche por la mala utilización o infraestructuras vetustas y sin mantenimiento añaden gravedad al problema

cultura, en buena parte al margen de la legalidad, que ha aumentado mucho el consumo de agua en 25 años, variando de cultivos herbáceos (remolacha, maíz, algodón) a leñosos (cítricos, frutales, olivar). En Andalucía, la falta de control ha disparado la demanda, que es más del 80% del agua usada en la región, y bastante más del 90% si tenemos en cuenta la que no retorna al sistema tras ser usada", denuncia Del Moral, también miembro del patronato de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

La demanda se incrementa y la disponibilidad del recurso disminuye. Hasta ahí todos —Administración, comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas, consumidores— son conscientes de la realidad. Sin embargo, las discrepancias surgen en el qué y el cómo, indica el catedrático de Economía aplicada Francesc Hernández. "La gestión en España es compleja en lo administrativo, en lo competencial y lo regulatorio. Cualquier organismo, entidad o Gobierno (central, autonómico, local) tiene competencia en esta materia; a ver cómo nos coordinamos", analiza. La maraña no termina ahí. "Si a esto le sumamos que el uso urbano recae sobre los municipios, pero que directamente no lo ejerce, sino que lo comparten y ceden a empresas, es un añadido más; la infraestructura es pública pero su gestión es privada".

Dispersión normativa

Esa gran dispersión normativa y administrativa genera dos problemas, a juicio de Garriga, "la dificultad de diseñar un mecanismo regulador estatal y que los municipios accedan a economías de escala para financiar las instalaciones y tecnologías necesarias para el suministro y el tratamiento de aguas residuales". Otra cuestión que resalta Hernández, también director del Grupo de Economía del Agua de la Universidad de Valencia, es la exclusión de los aspectos socioambientales de la tarifa: "Estamos cometiendo un error al asumir que el recurso es gratis, cuando debería identificarse y cuantificarse para promover su recuperación". Hoy solo se incluyen los costes de extracción, energía, potabilización, canalización, suministro, servicios, plantilla y el beneficio industrial, enumera.

En noviembre pasado, en el marco de la COP28, la agencia de califica-

ción Standard & Poors calculó que el 70% del PIB español está expuesto al riesgo de sequía extrema e incendios. Si bien la contabilidad nacional no recoge aún los efectos de esta anomalía, cada vez más economistas consideran vital realizar dicha estimación para conocer el coste económico de no actuar. Aunque las aseguradoras dan una idea. "Con datos de 2023, la sequía acaró unas pérdidas de 5.550 millones de euros debido a los fenómenos extremos que afectaron al sector agrario", señala Francisco Lombardo, presidente del Foro de la Economía del Agua, quien lamenta que "solo nos acordamos de la sequía cuando no llueve".

En Andalucía se estiman cuatro décimas menos del crecimiento previsto (1,9%), recoge un estudio de la Universidad de Loyola y de la Confederación de Empresarios de Andalucía que refiere Lombardo. Aunque los informes de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía lo cifran en 2,1 puntos por el peso del sector primario, la industria y servicios, anota Del Moral. Y en Cataluña se prevé un recorte de hasta dos décimas del 1,4% pronosticado, según las previsiones de los Empresarios de Cataluña. "Su importancia es enorme. Un reciente estudio de la Unesco calculó que más de 1.400 millones de puestos de trabajo dependen en gran medida del agua, es decir, el 42% de la población activa global. Y otros 1.200 millones, el 36%, moderadamente", apostilla Lombardo.

Molina aporta otro dato: "Solo la actividad generada gracias al trasvase Tajo-Segura crea 100.000 empleos a tiempo completo, directos e indirectos, y 3.000 millones. Si la escasez continúa, son miles de millones de PIB y cientos de miles de trabajos los que se destruirían". Todos los sectores, directa o indirectamente, se ven perjudicados, pero la mayor amenaza, dice, recae sobre la agricultura y el turismo. "Puede incluso llegar a perder mercados, como sucedió en Benidorm en los ochenta", alerta. Los expertos coinciden en el déficit de planificación e inversión y en su abordaje programado, no de forma imprevista y en contextos de emergencia como el actual. Además, ponen el acento en la educación para reducir el consumo.

El clamor general es que se extienda la reutilización de agua regenerada, del 10% actual al 100% (unos 4.000 hm³ más). "Se está aplicando el principio de usar y tirar; nada de economía circular. La usamos, la ensuciamos, la depuramos, pero no la devolvemos al sistema con la calidad con la que se nos ha facilitado", esgrime Hernández. Para ello, sugiere un cambio normativo (la regulación en España impide su uso para consumo humano) y que se cambie la estructura de la tarifa, no un alza lineal, aclara, para incorporar el coste de este proceso en el recibo. "Es nuestra salvación, simplemente devolver el agua ensuciada a su calidad inicial para poder reusarla, cerrando el ciclo", defiende.

En Cataluña, en los últimos dos años, en vez de tirar el agua depurada al mar, como se hacía antes, se está esparciendo en los ríos para su reutilización en el riego agrícola, cuenta Sánchez Vila. "Se hacen cuatro tratamientos: los dos típicos de la depuradora y un tercero antes de verterla al río. Durante su bajada se eliminan los nutrientes y mejora su calidad en un proceso natural conocido como renaturalización. Luego se capta



FOTO: A. REYNALDTE (GETTY IMAGES)

y se vuelve a hacer otro tratamiento antes de ponerla en servicio con todos los controles de calidad", expone. No obstante, de momento, solo se hace con el 30% de la tratada por el límite de capacidad de las estaciones.

El exiguo gasto en infraestructuras es precisamente otro mal que aqueja al sector. "Nuestro país necesita más que duplicar la inversión, que se sitúa en torno a los 2.400 millones anuales, hasta los 4.900 millones en abastecimiento, saneamiento y depuración", calcula Pascual Fernández, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). Así como una tarifa muy baja frente a otros países europeos: dos euros por habitante de media a la semana, incide.

Medidas más que parches

Es cierto que los planes hidrológicos de tercer ciclo (2022-2027), aprobados con retraso en enero del año pasado, incluyen 6.500 medidas que suponen un gasto de 22.844 millones, con la mayor partida para saneamiento y depuración (6.644 millones), y que el real decreto ley de medidas urgentes promulgado posteriormente en mayo prevé otros 2.190 millones para afrontar la sequía, de los que 1.400 se destinarán a nuevas infraestructuras. Sin embargo, más que medidas a corto plazo para paliar la urgencia, se demandan actuaciones a largo y que se ejecuten. Incluso, la Comisión Europea llevó en febrero a España ante el tribunal de Justicia de la Unión Europea "por no haber notificado por completo" sus terceros planes hidrológicos de cuenca, de conformidad con la directiva marco sobre el agua 2000/60/CE, ni sus segundos planes de gestión del riesgo de inundación, según la directiva sobre inundaciones 2007/60/CE. Según fuentes del sector, están pendientes los intracomunitarios insulares (de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura).

"Hay que hacer una planificación global, un plan hidrológico nacional, sin perjuicio de que existan los de cuenca, bajo el imperio de la ciencia y la técnica, y que se cumplan las inversiones programadas", creen desde la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua). En el ciclo anterior, el porcentaje de gasto no alcanzó el 50% de lo estipulado, cri-

fan. Además, piden que no se descarte ninguna solución: trasvases, embalses, desaladoras, regeneración... Para esta patronal, solo el ciclo urbano del agua requiere unos 35.000 millones.

Otro ejemplo de esa falta de planificación: en la anterior sequía catalana, la de 2008, con la vuelta de las lluvias y la llegada de la recesión se paralizaron las inversiones previstas y se han vuelto a retomar ahora, como la construcción de nuevas desaladoras, por la vuelta de la escasez hídrica. ¿Qué pasará cuando llueva otra vez?, se preguntan los expertos. ¿Se abandonarán y postergarán las soluciones?

Carlos Mario Gómez, catedrático de Economía de la Universidad de Alcalá e investigador de Imdea Agua, aboga por una estrategia de Estado de transición hídrica. "Acordar unos criterios que permitan avanzar hacia un mix sostenible de fuentes". Del Moral incorpora la palabra justa. "El reparto del recurso con criterios sociales y ambientales y su reasignación a través de bancos públicos participativos, ya previstos en la ley".

Alberto Garrido, director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, resume las tareas clave: "Más usos de aguas recicladas y regeneradas; más capacidad de desalación; más anticipación de las sequías, adelantando la reducción de usos agrícolas; mayor eficiencia en las redes urbanas y el sector turístico; congelar y estabilizar la superficie regable; combatir y erradicar los usos ilegales; controlar más a los usuarios agrícolas; mejorar el estado ecológico de los cuerpos de agua y el químico de las subterráneas, y gestionar los acuíferos".

Imagen de la Presa de los Hornos en el Barranco de Tejada, en la isla de Gran Canaria, a finales de octubre pasado.

● Derrama crítica

Reducir las pérdidas o el agua no facturada en las redes es uno de los puntos críticos, sobre todo en medianas y pequeñas poblaciones, con mayores barreras para acceder a la financiación. Se calcula una media de una fuga al año por cada dos kilómetros de tubería instalada, según datos del grupo Amper. El tiempo de reparación es de unos 13 días, detallan a partir de estudios realizados por el sector.

Por ejemplo, en una ciudad de 700.000 habitantes, con 1.100 kilómetros de tuberías, se producen 500 fugas al año, para una pérdida de 361.000 litros al día. En términos económicos, esto supone unos 4,5 millones de euros menos si el precio de la tarifa es de 0,0018 euros por litro, de acuerdo con los cálculos.

La solución tecnológica de Amper, TFS Hércules, reduce los días de fuga a cuatro y el coste de un escape a 1.814,40 euros, asegura. Además, ahorra 2,7 millones por la eficacia en la detección de fraudes (que se cifra en unos 3,6 millones tomando el supuesto anterior).

CASTILLA Y LEÓN 65

EN SEMIEXCLAVITUD

Detenidas cuatro personas por explotar a trabajadoras en una granja de ovino

M. A. VALLADOLID

Jornadas «maratonianas» de lunes a domingo, sin derecho a vacaciones o descansos y hacinadas en una vivienda en condiciones de «insalubridad». Así era el día a día de un grupo de trabajadoras extranjeras en situación de «vulnerabilidad» en una granja de ganado ovino de la provincia de Valladolid, a donde llegaban engañadas con promesas de un trabajo estable que les permitiría regularizar su situación España. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, tres de ellas de un mismo clan familiar, como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y favorecimiento de la inmigración clandestina. Las investigaciones comenzaron el pasado diciembre y tras ellas se pudo comprobar que la presencia de trabajadoras «en situación irregular» que desempeñaban su empleo «en condiciones abusivas que rozaban la semiesclavitud».

Domingo, 24 de marzo de 2024 • LA RAZÓN

Opinión

Acabar con la tuberculosis es nuestra responsabilidad

Julio Ancochea

Sí, se puede acabar con la tuberculosis y además es nuestra responsabilidad. La primera parte de esta frase vuelve a ser este año el lema escogido por la OMS para conmemorar el Día Mundial de la Tuberculosis que se celebra hoy. Y es cierto, hoy más que nunca se puede afirmar que podemos acabar con la tuberculosis: contamos con los avances en las técnicas moleculares que facilitan un diagnóstico más rápido tanto de la enfermedad como del perfil de resistencias. También disponemos de nuevos fármacos para las multidrogorresistencias que permiten tratamientos orales y más cortos.

Sin duda, es un hábito de esperanza, pero me permitirán, sin dejar por ello de ser optimista y positivo, que en una conmemoración como esta pongamos el foco en todo aquello que nos queda por hacer, que no es poco pero que sin duda podremos realizar si actuamos de manera comprometida, solidaria, responsable y, sobre todo, de forma conjunta.

Porque la tuberculosis es a día de hoy (sí, sí, todavía) la enfermedad infecciosa que más azota a la humanidad: 3.500 personas mueren en el mundo cada día por su causa, y otras 30.000 enferman a diario.

En pleno siglo XXI y cuando no solo se trata de una enfermedad prevenible sino que hace décadas, muchas para nombrarlas sin sentir algo de vergüenza, que tiene cura.

Por eso mismo no podemos quedarnos solo con los avances médicos (aunque bienvenidos son, claro que sí). Debemos prestar atención a los condicionantes sociales que provocan la enfermedad y promueven su propagación epidémica: la pobreza, la desnutrición, la vivienda precaria, la exclusión social, la marginación y el estigma.

La tuberculosis nace de la pobreza y genera pobreza: nace de la desigualdad y genera nuestra

vergüenza.

Esta enfermedad tiene uno de los tratamientos más costoefectivos. Pero lamentablemente su abordaje hace mucho que dejó de considerarse una inversión. Aunque hoy, como les decía al principio, la esperanza es más fuerte que el desánimo: en septiembre la reunión de alto nivel mantenida en Naciones Unidas dio como fruto el compromiso político de hacer un esfuerzo mayor. Y la OMS cuenta con un plan de acción 2023-2027.

Precisamente la directora del Programa Global de Tuberculosis de la OMS, Tereza Kasaeva, se dirigía a los asistentes a la 12ª Jornada de Actualización de la Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad (Red TBS-Stop Epidemias), que hemos celebrado esta semana en Madrid, para pedir públicamente un mayor esfuerzo. Contamos con los compromisos políticos y ahora debemos conseguir que se materialicen en acciones tangibles.

Y cuanto antes, mejor, porque también un representante de la OMS, el doctor Ernesto Jaramillo, alertaba en la citada reunión de que el cambio climático puede incidir de manera muy significativa, a través por ejemplo de la inseguridad alimentaria, y hacemos perder los avances conseguidos para erradicar esta enfermedad de la injusticia.

La solidaridad deberá ser ahora algo más que una palabra preciosa.

Está en nuestras manos poner fin a la tuberculosis, debemos sumar esfuerzos. Hacerle frente es a la vez la mejor manera de mejorar el planeta, porque los avances científicos aquí nada pueden hacer por sí solos: necesitamos revertir las desigualdades y sembrar la equidad, es imprescindible mejorar las condiciones sociales y facilitar un acceso a la sanidad más global. Sí, podemos acabar con la tuberculosis: es nuestra responsabilidad.

Julio Ancochea Bermúdez
es presidente del Comité Científico de la Red TBS-Stop Epidemias

Domingo 24.03.24
EL NORTE DE CASTILLA

ACTUALIDAD EMPRESARIAL EN CASTILLA Y LEÓN

Cajamar constata que en 2023 el valor de las exportaciones agroalimentarias creció el 3,5%

En un año caracterizado por las dificultades derivadas de las caídas en la producción de diferentes sectores por la sequía, así como por la persistencia de la inflación, las exportaciones agroalimentarias consiguieron crecer en 2023 un 3,5% en valor hasta los 69.608 millones de euros. Este crecimiento contrasta con la caída de las ventas exteriores en volumen, que descendieron un 9%, con bajadas en todos los principales productos exportados: 6% en frutas y hortalizas, 8% en carne de cerdo, 33% en aceite de oliva y 2% en pescados y mariscos y vinos.

Así se recoge en el informe de Cajamar 'Análisis de las exportaciones agroalimentarias. Año 2023', dirigido por Jaime Palafox, experto en internacionalización, tendencias de consumo y sostenibilidad agroalimentaria, que se presentó en la tarde de ayer en la feria Alimentaria.

El estudio recoge, como dato positivo, que la balanza comercial agroalimentaria tuvo un año más un superávit de 14.408 millones de euros, siendo con diferencia el mayor diferencial entre exportaciones e importaciones de entre los grandes sectores de



Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar, a la derecha.

la economía española, lo que resalta la importancia del agroalimentario dentro del sector exterior español.

En 2023, España vuelve a ser el país que más crece, con este +3,5%, por delante de Países Bajos, Alemania, Francia e Italia, principales exportadores agroalimentarios de la UE.

El análisis de los datos a 10 años muestra que España lidera también el crecimiento entre los principales países de la UE con un +6,6%, seguido de cerca por Italia con un +6,3%; detrás se sitúan Países Bajos con un +4,1%, Alemania con un +3,1% y, por último, Francia con una media del +2,6%.

Desglosando los datos entre exportaciones a la UE y países terceros durante la última década, las destinadas a la UE apenas han

bajado su porcentaje sobre el total; si bien, se observa un claro cambio de tendencia a partir de 2020. Así, entre 2022 y 2023 han pasado de suponer el 64% del total al 67%, ganando tres puntos porcentuales. En los datos por países destaca la pujanza de las exportaciones españolas tanto a Alemania (+903 millones de euros y +12%), Portugal (+795 millones y +12%) y Francia (+674 millones y +7%), como a países del Este como Polonia (+220 millones de euros y +13%), República Checa (+136 millones y +19%) y Rumania (+132 millones y +24%). En países terceros se produce por primera vez en los últimos diez años un descenso global en las exportaciones (-1.340 millones de euros) marcado por los descensos en China (-642 millones de euros y -26%).

EL MUNDO

DOMINGO 24 DE MARZO DE 2024

DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN

DEL SIGLO XXI

TRIBUNALES

Un año sin sentencia por la muerte de los mineros de la Hullera Leonesa

El próximo 30 de marzo se cumple un año desde que la vista oral por la muerte de 6 mineros en la Hullera Leonesa quedó vista para sentencia, pero aún no hay decisión tomada

Página 7

EMPRENDEDORES

El hilo de Zamora que une la Semana Santa a Berasategui y al Papa

Luisa y Jorge son los dueños de Mercería Costuras, un negocio que trabaja para la Semana Santa zamorana, ha vestido al chef Berasategui e incluso ha llegado a oídos del Papa

Página 5

Castilla y León exhibe un potencial logístico que mueve 159 millones de toneladas de mercancías

● La situación estratégica de la Comunidad y su extensión propicia que el sector mueva más de 2.800 millones de euros al año ● Las empresas de distribución abren sus propios enclaves que complementan a la iniciativa pública de la red 'CyLog'

SANTIAGO G. DEL CAMPO

VALLADOLID

Las autovías de Castilla y León son arterias de riqueza para la Comunidad Autónoma. Un capital que se traduce en el 4,5% del PIB autonómico, según datos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, lo que se traduce en más de 2.800 millones de euros al año. Ese «tesoro en movimiento» que circula a lo largo y ancho de 17.000 kilómetros lineales. –y eso teniendo en cuenta solo las carreteras de titularidad estatal y autonómica–, pesa nada menos que 159 millones de toneladas.

Son los datos macro de una actividad en auge que es la razón de ser de una estrategia autonómica, la red de enclaves logísticos CyLoG, que desde 2005 ha puesto en marcha un nutrido abanico de *Infraestructuras Complementarias del Transporte de Mercancías y la Logística*, que es el nombre formal de CyLoG. Pero aparte de esa estrategia pública está la iniciativa del sector privado, que complementa esa red con centros logísticos propios tan relevantes como los recién inaugurados de Bridgestone en Burgos y Aldi en Miranda de Ebro, o los de Mercadona y Decathlon en el polígono leonés de Villadangos del Páramo, o el de Gadis en Medina del Campo, o el de Nissan en Ávila y el de Amazon en Valladolid.

Los enclaves de la red CyLoG han ido creciendo durante dos décadas, como parte de una estrategia que tiene como misión «ayudar al sector productivo de Castilla y León a ser más competitivo e integrada», explican fuentes de la Administración autonómica.

Uno de los principales motivos del auge de la logística, aparte de la situación estratégica y la extensión de la Comunidad, es el peso de su sector productivo, y además, la cercanía de Castilla y León con los puertos atlánticos y cantábricos de la península ibérica, lo que la convierte en área de influencia de esos puertos.

Castilla y León es un referente logístico en el noroeste peninsu-



Centro logístico de Mercadona en el polígono industrial de Villadangos del Páramo en León. E. M.

lar, junto a importantes corredores internacionales como el Atlántico y el Mediterráneo. De hecho, el Corredor Atlántico es uno de los prioritarios de la *Red Transeuropea de Transporte (Ten-T)*, que conecta la península ibérica con el resto del continente y supone un elemento fundamental para la vertebración y la cohesión territorial de España.

Los enclaves CyLoG son los centros logísticos y de transportes de Benavente, Burgos, León, Palencia, Salamanca-Cetramesa, Salamanca-Zaldeva, Ávila, Segovia, Ponferrada y Valladolid. La Administración autonómica respalda el desarrollo de estos enclaves, de las infraestructuras complementarias del transporte y de las infraestructuras intermodales, como la ampliación del Centro de Transportes de Benavente, en Zamora con el desarrollo del Sector Puerta del Noroeste; el desarrollo del Área Logística-Industrial La Llanada, de Ponferrada; el impulso del Centro de Transportes de Medina del Campo; la ampliación del CyLoG de Ávila, vinculado al desarrollo logístico de Nissan; la ampliación del Centro de Transportes en 220.000

metros cuadrados y la Terminal de Mercancías de Villafra.

La estrategia del sector público también participa en el desarrollo de las conexiones y plataformas intermodales consideradas de interés. «Para lograr una red intermodal que consiga el reequilibrio de la estructura logística territorial y actúe de una manera decidida sobre el reparto de la cuota modal, con un escaso 3% para el ferrocarril, frente a más de un 85% para la carretera», explica la misma fuente.

Por ello la Administración autonómica impulsa la ejecución del ramal ferroviario de acceso a la Zona Industrial Sudeste de Burgos; la ejecución del ramal ferroviario de acceso al Polígono Industrial de Villadangos del Páramo y su apeadero provisional de tren para la carga y descarga de mercancías; el desarrollo de una plataforma logística intermodal en Ponferrada y la construcción de la plataforma Logística intermodal-Puerto Seco de Salamanca.

A todo ello enriquece la aportación de la iniciativa privada, que promueve sus propios centros logísticos, a veces en asociación con enclaves CyLoG y en otras ocasiones

en lugares muy distintos. Siete de ellos destacan por su volumen:

► **ALDI.** La firma reforzó hace pocos días, el 13 de marzo, su capacidad logística en España con la inauguración de un nuevo centro de distribución en el municipio burgalés de Miranda de Ebro. Se trata de la primera plataforma logística de Aldi en la zona norte y la séptima en el país. El centro dará soporte a las tiendas de hasta 17 provincias ubicadas de Castilla y León, Galicia, el País Vasco, Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra. Un centro que supone la creación de 130 nuevos empleos directos, entre personal de logística y administración. Por otro lado, la plataforma prevé contar con certificados de sostenibilidad y eficiencia energética y cuenta aproximadamente con 40.000 metros cuadrados operativos, 85 muelles de carga y capacidad para expedir y recibir 600.000 palés al año. Se espera movimiento diario de 90 tráileres de entrada y salida. Precisamente este año Aldi prevé ampliar su presencia en la zona norte de España con nuevas aperturas en Castilla y León, Galicia, el País Vasco y Cantabria.

► **GADIS.** La marca inauguró su plataforma logística en Medina del Campo en 2012 y desde entonces no ha dejado de crecer. Cuenta con una superficie de 80.000 metros cuadrados de parcela junto a la autovía A-6 Madrid-La Coruña, con una superficie construida de 20.619 metros cuadrados. El centro logístico cuenta con una gran nave central con las secciones de recepción y expedición de mercancías, almacén de productos refrigerados y de temperatura ambiente, áreas de preparación de pedidos, de tránsito de transportes y central de frío.

Desde esta plataforma se sirven productos de alimentación, droguería e higiene a los 64 puntos de venta Gadis, Claudio y Cash Ifa de Castilla y León. Su puesta en funcionamiento ha permitido mejorar el servicio a los clientes de la Comunidad. Asimismo, «disponer de un centro logístico en Medina del Campo facilita a los proveedores de origen local la comercialización de sus productos en los canales de venta de la compañía, impulsando el consumo de cercanía y el desarrollo socioeconómico de su entorno», explican fuentes de la compañía.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

CASTILLA Y LEÓN



Estación logística de Amazon en Valladolid. I.CAL



Bloque logístico de Aldi, recién inaugurado en Miranda de Ebro. E.M.



Estación logística de GADIS en Medina del Campo. E.M.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El número de trabajadores del centro es de 70 personas. «Gadis trabaja de forma continua para mejorar la eficacia y sostenibilidad de su sistema logístico, en línea con su propia filosofía de priorizar la compra a proveedores de proximidad. Maneja el control de todo el proceso, desde el origen hasta la entrega diaria a los establecimientos, garantizando su trazabilidad», añade la misma fuente.

► **NISSAN.** Fue el pasado año cuando la compañía automovilística inauguró su centro logístico en Ávila, el 14 febrero de 2023. Cuenta con 21.000 metros cuadrados de superficie, y desde allí se distribuyen componentes metálicos y plásticos para su producción, además de producto acabado. Nissan cuenta también con algunos procesos de preparación de lunas de puertas laterales, tapas de cargador de batería y elementos de sistemas de escape de vehículos Nissan, todo ello para recambio.

El centro logístico de Nissan en Ávila cuenta con 8 muelles de descarga y la posibilidad de almacenamiento de contenedores y/o estantería y zona de picking. Diez empleados trabajan de forma continuada en el centro, una cifra que se ve aumentada en función del movimiento de piezas por parte del personal de la misma planta de Ávila.

El centro dota de mayor capacidad logística a la planta y centralizar toda la actividad en una sola área conectada de manera digital a la planta. De esta manera, permite liberar otros espacios disponibles en la planta productiva para la incorporación de más carga de trabajo para nuevos proyectos.

El plan de inversiones y ayudas públicas permitió a Nissan iniciar en noviembre 2021 las obras en la zona del CyLoG para la construcción del nuevo almacén de 21.000 metros cuadrados, un espacio que Nissan ha instalado al lado de la fábrica con el apoyo del Ayuntamiento de Ávila y la

Junta de Castilla y León. Gracias al nuevo plan de negocio a medio plazo, la marca reorganiza el área logística para poder albergar nuevos procesos y proyectos en la planta.

► **MERCADONA.** En cuanto al centro logístico de Mercadona en el polígono leonés de Villadangos del Páramo, la marca lo inauguró en 2010, con 255.000 metros cuadrados de parcela, en los que se distribuyen zonas comunes (5.500 metros cuadrados), nave de secos (32.000); nave de frío (26.000); congelado y frescos (25.500); un centro de proceso de datos (CPD) con 3.500 metros y nave de envases (11.000)

Desde el centro se distribuyen 9.100 palets al día, con un volumen máximo de 354.000 metros cúbicos al mes. La capacidad de almacenaje es de 36.500 palets y 445.000 bandejas, con capacidad de abastecimiento para 180 tiendas. Para conseguirlo, el centro gestiona alrededor de mil camiones diarios de entrada y salida, para lo cual da empleo a un millar de trabajadores.

La firma ha hecho en los últimos años una decidida apuesta por la energía renovable, y así, ha instala-

do 11.066 placas fotovoltaicas en tres naves, con una potencia de 5,2 megavatios pico (MWp). También recicla el agua de lluvia mediante dos circuitos de pluviales. También cuenta con 500 placas termosolares.

► **DECATHLON.** Para hablar del centro logístico de Decathlon en el polígono leonés de Villadangos del Páramo hay que retrotraerse a los datos que facilitó la compañía en abril de 2019, cuando inauguró el centro, ya que considera reservada cualquier información sobre su plantilla, movimientos de mercancías y resultados, de tal manera que no la facilita a los medios. Lo que se sabe es que el centro cuenta con una superficie de 32.645 metros cuadrados, y que en su apertura daba servicio a 37 tiendas Decathlon del norte de España, con una capacidad de distribución de más de 25 millones de artículos deportivos al año. Con su inauguración, la marca creó 180 nuevos empleos locales.

► **AMAZON.** La estación logística de Amazon en Valladolid cuenta con una superficie total de 42.000 metros cuadrados y opera desde 2021. El centro se ocupa de clasificar los paquetes, car-

gar los vehículos de entrega «y optimizar las rutas de entrega a los clientes de la manera más eficiente y rápida», puntualizan fuentes de la marca. En la estación logística trabajan más de 80 trabajadoras y trabajadores fijos. «Todos cuentan, desde el primer día, con beneficios como plan de pensiones, seguro de salud privado, seguro de vida, permiso por nacimiento y cuidado del menor ampliado y retribuido, entre otros», detallan las mismas fuentes.

Por otro lado, en Amazon tienen el compromiso de impulsar el crecimiento y la formación continua de las personas empleadas y cuentan con programas como *Career Choice*, que tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para alcanzar sus aspiraciones profesionales dentro o fuera de la compañía, mediante la formación en sectores profesionales de alta demanda. Así, cubren el 95% de la matrícula, los libros y las tasas; 2.000 euros al año durante 4 años; y 4.000 euros al año en el caso de las titulaciones cualificadas. El programa incluye clases de inglés y español para personas no nativas de esta lengua, un aspecto muy habitual en Amazon ya que, solo en el centro de Valladolid, se cuenta con personas de más

de 20 países diferentes, incluyendo Marruecos, Italia, Venezuela, Grecia, Polonia o España.

► **BRIDGESTONE.** El último gran centro logístico acaba de ser inaugurado, el pasado 20 de marzo, en el polígono industrial burgalés de Villalonquérjar. Se trata de Bridgestone, que pone en marcha uno de los centros más importantes de la compañía en Europa, según señaló la empresa, tras una inversión de más de 40 millones de euros. Este centro, ubicado en el Polígono de Villalonquérjar IV, de más de 44.500 metros cuadrados, es capaz de almacenar 800.000 neumáticos. Posee 24 muelles de carga y descarga, y generará más de 50 empleos directos.

Así lo indicó el VP Europa Sur Bridgestone EMEA, José Enrique González, durante la inauguración oficial de estas instalaciones. «Este centro es un paso más en nuestro compromiso de ofrecer soluciones de movilidad sostenibles, y nuestra apuesta por la digitalización, la innovación y la sostenibilidad», indicó González, que recordó la apuesta de la compañía con Burgos, tras conocerse que destinará 207 millones de euros hasta 2030.

La conexión ferroviaria impulsará Villadangos en 2025

Avanzan las obras que convertirán en intermodal el mayor nodo logístico del norte peninsular

S. G. C. VALLADOLID

Si hay expectativas en el desarrollo de un enclave de transporte puntiero ese es el polígono leonés de Villadangos del Páramo, al que una conexión ferroviaria específica convertirá en intermodal el próximo año. Se trata del mayor nodo logístico del norte peninsular tras la ampliación, iniciada en enero de 2023, de 184,1 hectáreas de suelo, lo que casi duplicará el espacio de suelo industrial anterior, de 200 hectáreas.

Se trata de un ensanche que se vio justificado por el incremento de la demanda, con una alta ocu-

pación por empresas de logística, distribución y servicios. Ya en el momento del convenio de ampliación el área industrial y logística generaba un empleo de más de 5.000 trabajadores.

Tras el protocolo de ampliación, firmado por el Administración autonómica y el Ayuntamiento, la Sociedad Pública Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) se encarga de las obras de urbanización del suelo industrial, con una inversión de 36,7 millones de euros, para dotar las parcelas de todos los servicios. Esas

obras de urbanización no estarán plenamente operativas hasta el segundo trimestre de 2025, pero más de la mitad del suelo ya está reservado por empresas que quieren instalarse, y que se espera que creen en torno a 2.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años.

Pero es la terminación del ramal ferroviario el que causa mayor inquietud, ya que su primera fecha de conclusión se fijó en 2023. Ahora, tras meses de retraso, entre otras cuestiones por la incorporación de puntos de acceso a más empresas del polígono, se espera que la ac-

tación esté finalizada en el primer trimestre del año que viene. Y es que en el proyecto inicial, las vías solo se iban a instalar en *Network Steel*, la antigua Vestas, mientras en la actualidad está previsto que también haya derivaciones a otras compañías, entre ellas el centro logístico de Mercadona.

El acceso ferroviario permitirá una conexión privilegiada con el puerto de Gijón. Para el desarrollo del ramal ferroviario se creó la sociedad Villadangos Intermodal Vías, de la que forma parte el Ayuntamiento y varias empresas.

EL MUNDO. Domingo 24 de marzo 2024

Iberdrola vigila desde Salamanca las centrales hidroeléctricas del país

Mañueco visita el Centro de Operación de la compañía en Carbajosa de la Sagrada

VALLADOLID El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se interesó este pasado viernes por las labores que realiza el personal del Centro de Operación Hidroeléctrico que Iberdrola tiene en la localidad salmantina de Carbajosa de la Sagrada, y cuyas instalaciones visitó acompañado del CEO de Iberdrola Renovables Energía, Julio Castro, el alcalde del municipio, Pedro Samuel Martín, y el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo.

Según recordó ayer la compañía en un comunicado remitido a Ical, el centro es una «importante infraestructura» que, desde la localidad de Carbajosa de la Sagrada, a tan solo tres kilómetros de la capital salmantina, realiza el control y la supervisión de todas las centrales hidroeléctricas que Iberdrola tiene en España.

Con una plantilla total de 52 personas, el diseño del centro responde al «concepto de operación telemandada de las instalaciones», según explicaron desde Iberdrola. Así, dispone de «modernos» sistemas informáticos y de comunicaciones que permiten la operación «segura y permanente» durante 24 horas al día los 365 días del año. Desde la compañía lo calificaron como «el auténtico comodín de la producción energética y el medio para asegurar que las necesidades de la demanda siempre sean satisfechas al instante».

Históricamente la operación de las centrales hidroeléctricas de Iberdrola en España se realizaba desde cuatro Centros de Operación de Cuenca (COCs): Sil, Tajo, Duero Norte y Mediterráneo. La tecnología de estos 'COCs' era de finales de los años 90. En 2018, se inició la renovación de los sistemas y una reestructuración de la operación de las centrales hidro-

eléctricas, que tuvo como resultado la unificación de los cuatro 'COCs' en un único centro, denominado Centro de Operación Hidroeléctrico (COHI), que está situado en el centro de trabajo de Iberdrola del Polígono El Montalvo, en Carbajosa de la Sagrada, en la provincia de Salamanca.

Iberdrola estrenó este centro de trabajo en el verano de 2017, situado en una «zona estratégica», al estar próximo a las principales vías de comunicación de la ciudad. Con ello, pretendieron «facilitar el desarrollo de las actividades que realizan las personas que ocupan el complejo, además de garantizar la mejora en los tiempos de respuesta y atención del buen estado de las líneas eléctricas y del suministro».

Estas oficinas concentran a la plantilla de Iberdrola en Salamanca en un «centro eficiente y moderno, dotado de las últimas tecnologías y de un equipamiento e instalaciones adaptadas a las necesidades de los puestos de trabajo que requiere la compañía, apostando siempre por la calidad y ergonomía de los estándares de la compañía», detallaron desde la compañía.

Por otro lado, Iberdrola también informó ayer de que monitorizará a lo largo del próximo año los resultados del proyecto Wineesolar, una viña fotovoltaica en Guadamur (Toledo), para seguir perfeccionando este novedoso sistema que tiene previsto replicar en otras explotaciones vitícolas en España, que concentra el 13 por ciento de los terrenos cultivados con viñedos del mundo.

Según informó Iberdrola, Wineesolar ya está operativo en los viñedos de las bodegas González Byass y del grupo filipino Emperador y se desarrolló a través de su programa de startups 'Perseo».



Mañueco visita el Centro de Operación Hidroeléctrico de Iberdrola. ICAI.

ACTUALIDAD ECONÓMICA

Cataluña, el infierno fiscal de la clase media

● Es la CCAA que más exige a las rentas de 30.000 y 45.000 euros ● Madrid, en cambio, es la región que menos las grava

DANIEL VIAÑA MADRID
La Comunidad de Madrid y Cataluña encarnan dos modelos fiscales antagónicos, con unas diferencias que son especialmente notables cuando se atiende a lo que cada una de estas autonomías exige a la clase media a través del IRPF: la región madrileña es el territorio de régimen común que menos grava a estos contribuyentes, mientras que la catalana es la que exige un mayor pago por este impuesto. Y la distancia en algunos tramos es sustancial, llegando incluso a superarse ampliamente los 1.000 euros de diferencia.

Por ejemplo, un contribuyente madrileño, soltero, menor de 65 años y sin hijos que tiene unas rentas de trabajo de 30.000 euros pagará 4.600 euros por IRPF en Madrid, mientras que en Cataluña la cifra se va por encima de los 5.000 euros, según los cálculos del Consejo General de Economistas. Si la renta es de 45.000 euros, el dato madrileño será de 8.886 euros y el catalán, 9.688 euros. Y si los ingresos suben hasta 70.000 eu-

32.000 euros supondrá un ahorro de 50 euros con respecto a 2022.

Además, desde el Ejecutivo madrileño recuerdan que «en relación a 2021, sumando la rebaja de 0,5 puntos en cada tramo y la deflatación de 2022, el ahorro sería de 202 euros». Y para un contribuyente con unas rentas de 90.000 euros, el ahorro con respecto a 2022 será de 216 euros y de 793 euros frente a 2021.

En Cataluña, con el independentismo centrado en exigir el recaudar sus propios impuestos y romper incluso la solidaridad interregional, no se ha tomado ninguna medida de este tipo para aliviar la carga de los contribuyentes en el impuesto de la renta. Es cierto que los Presupuestos que la Generalitat había dibujado para este año sí contenían una reducción del IRPF que hubiese beneficiado a las rentas de hasta 33.000 euros, pero el rechazo de las cuentas públicas que ha precipitado las elecciones autonómicas también ha hecho que la modificación decaiga.

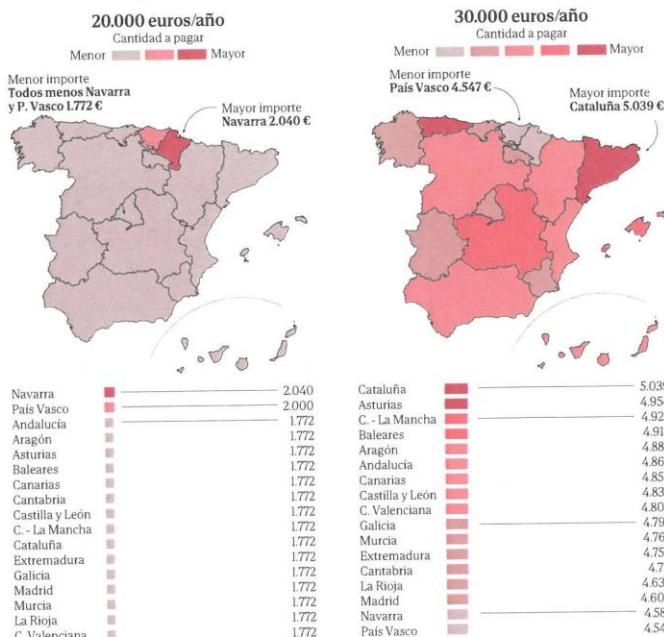
Por lo tanto, Cataluña se mantiene como la región que más grava a las rentas medias. Y a ello hay que sumar que esta comunidad es la que más impuestos propios tiene con un total de 11, entre los que se incluye el canon del agua, el impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas o la figura sobre las estancias en establecimientos turísticos.

Otra región que también exige un esfuerzo comparativamente muy elevado a las rentas medias es Extremadura. El mencionado Consejo de Economistas, que recientemente publicó su última edición del ya histórico *Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2024*, constata que un contribuyente con unas rentas de trabajo de 45.000 euros paga en esta región algo más de 19.500 euros.

Los contribuyentes con mayores ingresos, en cambio, en la región en la que más deben pagar por el IRPF es en la Comunidad Valenciana. Los ciudadanos que ganan 110.000 euros tienen que abonar más de 38.700 euros por el impuesto, mientras que en Madrid, que es la comunidad que menos grava también a las rentas altas, la cifra es 35.100 euros.

IRPF POR COMUNIDADES Y SEGÚN NIVEL DE RENTA

Contribuyente que obtiene únicamente rentas del trabajo, soltero, menor de 65 años y sin hijos.



El próximo 3 de abril comienza la campaña de la renta 2023

Madrid también es el territorio que menos exige a las rentas altas

ros, el madrileño pagará 17.981 euros y el catalán, 19.200 euros.

Estas pronunciadas diferencias se harán especialmente evidentes con el inicio de la próxima campaña de la renta, que tendrá lugar el 3 de abril y en la que los contribuyentes tendrán que liquidar el impuesto relativo a 2023. Los madrileños se verán favorecidos por la deflatación aplicada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre la parte autonómica del impuesto, y que para un contribuyente con dos hijos y unas rentas de

*En el País Vasco están incluidos los datos de las haciendas forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya
FUENTE: REAF asesores fiscales.

28 ECONOMÍA

Domingo, 24 de marzo de 2024 • LA RAZÓN

A fondo

R. L. Vargas. MADRID

En los apenas trece años de vida que tiene, Forestalia se ha convertido en uno de los referentes de la promoción de energías renovables en España. La compañía aragonesa fundada por el empresario zaragozano Fernando Samper factura cerca de 100 millones de euros al año (según las últimas cuentas públicas, las de 2022). Más de 2 gigavatios (GW) de instalaciones fotovoltaicas, eólicas y de generación a partir de biomasa promovidas por Forestalia se han construido hasta la fecha y su actual cartera de proyectos en desarrollo supera los 8 GW en comunidades autónomas como Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña o La Rioja. Su actividad ha permitido que Aragón se haya convertido en la región donde más han crecido las energías renovables en España. El territorio lidera la instalación de estas infraestructuras con un 13% de la generación de energía del país, exportando el 44% de su producción.

Pero el fulgurante crecimiento de la compañía, que despegó al convertirse en la inesperada ganadora de la primera subasta de potencia renovable de la historia de España que tuvo lugar en enero de 2016, ha despertado recelos. Hasta el punto de que contra la compañía se han interpuesto varias denuncias en los tribunales y que en las Cortes de Aragón hay en estos momentos en marcha una comisión de investigación que arrancó el día 9 de febrero para esclarecer si durante el mandato del socialista Javier Lambán se cometieron irregularidades en la adjudicación de licencias para la construcción de instalaciones renovables, con buena parte de los focos centrados en Forestalia.

Denuncias

El núcleo de las sospechas sobre la relación entre Forestalia y el anterior gobierno socialista lo plasmó en varias denuncias Teruel Existe en diciembre de 2022. La plataforma ciudadana trasladó entonces a las Fiscalías de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como a la General del Estado, denuncias de quince casos en los que alertaba de posibles «irregularidades» que podrían constituir un posible delito medioambiental en distintos proyectos eólicos y fotovoltaicos repartidos por diferentes localida-

des de las tres provincias de la comunidad aragonesa.

En sus denuncias, Teruel Existe denuncia que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), organismo público encargado de resolver los expedientes sobre renovables a nivel autonómico si no son de gran entidad, ha realizado desde 2021 contratos con tres em-

presas para apoyo técnico y administrativo para la tramitación de expedientes. Pero estas compañías, según la plataforma, han elaborado asimismo para los promotores de los parques, incluido Forestalia, estudios de impacto ambiental que son objeto de esta evaluación y tienen «algún tipo de relación de interés con el promo-

tor del expediente», lo que, a su entender, constituye como mínimo un conflicto de intereses.

Teruel Existe también ha denunciado la fragmentación de los parques para que no superen los 50 megavatios de potencia instalada. De esta manera, se saltarían el control del Gobierno central y no tendrían que ser aprobados por

el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), quedando la resolución del expediente en manos del Inaga, organismo que dirige Jesús Lobera, un histórico del socialismo aragonés.

Defensa

A las acusaciones vertidas en las denuncias, Lobera ha contestado públicamente asegurando que las consultoras fueron contratadas para analizar los parques ante el aluvión de expedientes que debían presentar actas de compatibilidad de cada expediente supervisado y que, «en ningún caso», llegaron a intervenir en parques en los que previamente habían colaborado. También ha añadido que la fragmentación de los proyectos en ningún caso rebajó el grado de control, ya que en todos los casos se analizaban los efectos acumulativos con todos los par-

Las sospechas y las denuncias se ciernen sobre Forestalia

► La promotora renovable tiene varias causas abiertas en los juzgados y centra la atención de una comisión de investigación en las Cortes de Aragón



ques planificados y en funcionamiento, además de actividades en su área de influencia que pudieran ser relevantes para el impacto ambiental del proyecto.

A pesar de las explicaciones, y como prometió en campaña, Jorge Azcón, presidente popular de Aragón, ha puesto en marcha una comisión de investigación con el apoyo de Vox en las Cortes de Aragón para esclarecer los hechos. En la primera sesión, los representantes de las compañías negaron cualquier tipo de irregularidad y aseguraron que cumplen con los mismos requerimientos que en otras comunidades autónomas.

El compareciente más esperado, Luis Marruedo, ex alto cargo en los gobiernos de Marcelino Iglesias y Luisa Fernanda Rudi y ahora directivo de Forestalia, negó en la primera sesión de la comisión que haya «fraude de leyes» ni que se «burlen» procedimientos

La relación entre la empresa y el Gobierno del socialista Lambán está en la diana

Hay denuncias por presuntos conflictos de intereses y maniobras para eludir controles

por el hecho de tramitar proyectos de 50 megavatios, que son más viables. De hecho, afirmó que se han sometido más al control del Ministerio para la Transición Ecológica que al del Gobierno de Aragón y negó que el hecho de corregir un proyecto tras someterse al trámite de información pública obligue a sacarlo de nuevo, salvo que tenga efectos significativos.

Sospechas del PP

El Partido Popular se ha mostrado especialmente escéptico respecto a la relación entre el anterior gobierno regional socialista de Aragón y los promotores de energías renovables y, en algunos casos, ha aireado públicamente sospechas que dejan en un lugar cuanto menos incómodo estas relaciones. Hace unas semanas, en un pleno de la Diputación de Teruel, su presidente, el popular Joaquín Juste, alcalde también de Lidón, aseguró

que era «inaudito que el delegado territorial del Gobierno de Aragón [en Teruel] acompañe a una empresa a hablar con los ayuntamientos para que firmen en favor de esa empresa». «No me pueden decir que es mentira. En esas reuniones he estado yo como alcalde de mi pueblo», espetó a los socialistas que le recriminaron tal afirmación. Aunque Lidón no hizo referencia expresa a Forestalia, muchos interpretaron que «la empresa» a la que se refería era la aragonesa.

Las denuncias contra Forestalia no se han detenido pese a la puesta en marcha de la comisión parlamentaria. Hace apenas unas semanas, Teruel Existe llevó a los tribunales la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del megaproyecto Clúster Maestrazgo, integrado por 22 parques eólicos con 882,85 megavatios de potencia total a instalar por Forestalia. La

denuncia asegura que hay 84 aerogeneradores (de entre los 125 proyectados) localizados en territorios de Red Natura 2000; 91 en Zonas de Sensibilidad Ambiental Máxima (según la propia zonificación del Ministerio para la Transición Ecológica); diez kilómetros de línea de Alta Tensión en espacios naturales protegidos y una superficie deforestada equivalente a 1.200 campos de fútbol.

Aunque la DIA del ministerio ha sido igualmente favorable para el proyecto, Teruel Existe afirma que Transición Ecológica «prácticamente copia en todo la propuesta del Inaga».

En mayo del año 2021, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) aseguró también que «todos los parques eólicos que conforman el Clúster del Maestrazgo afectan a espacios Natura 2000, la red de las zonas de mayor valor ecológico en Europa».



Una compañía asesorada por una pléyade de ex cargos públicos

► Hasta diez expolíticos, incluido José Manuel Soria, la aconsejan

R. L. V. MADRID

Una auténtica constelación de ex cargos públicos orbita alrededor de Forestalia. Hasta diez expolíticos asesoran a la compañía de energías renovables ya sea formando parte de su plantilla o de manera externa. Cinco ex altos cargos en los gobiernos de Marcelino Iglesias, Luisa Fernanda Rudi y Javier Lambán, designados en su día por el Partido Aragonés (PAR) y Chunta (CHA) ahora desempeñan distintas funciones de responsabilidad en la compañía aragonesa. A ellos se suman dos exconsejeros y un ex director general de Energía de Cataluña.

Aunque de entre todos los que asesoran a la desarrolladora de energías renovables, el nombre que más destaca es el del ex ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria.

El político canario ostentó la

cartera de la que dependía la política energética del país entre diciembre del año 2011 y el 15 de abril de 2016. Muchos acusaron en su momento a Soria de atascar el desarrollo del sector de las renovables en España con la implantación del denominado «impuesto al sol» al autoconsumo y el recorte de las primas para estas energías, que supuso un hachazo de 2.700 millones de euros para las compañías del sector.

Soria comenzó sus labores de asesoramiento externo a Forestalia en el año 2018, tal y como avanzó el diario económico «Cinco Días». En su condición de ministro de Industria y Energía, Soria fue el encargado de poner en marcha la primera subasta de potencia renovable en la historia de España en enero de 2016. La sorprendente ganadora de aquella subasta fue, precisamente, Forestalia, que logró hacerse con 300 de los 500 megavatios eólicos en liza. La empresa aragonesa se haría con

hasta 1.200 megavatios de potencia eólica adicional en la segunda subasta, que se celebró en mayo de 2017, una cantidad que superó a la que se adjudicaron Naturgy y Endesa conjuntamente en la convocatoria.

Entre medias, la compañía aragonesa también se adjudicó 108 megas de biomasa y otros 300 de energía fotovoltaica.

Junto a Soria, destacan también en sus labores de asesoramiento a la compañía dos exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, Josep Grau y Felip Puig, así como un ex director general de Energía.

El último con pasado político en sumarse a la red de asesores de Forestalia es Julio Tejedor, que fuera secretario general de la Presidencia del Gobierno aragonés entre los años 2015 y 2021. Además de impulsor, curiosamente, de la Ley contra las Puertas Giratorias, fue proclive a desatascar las renovables y asesora ahora tanto a Amazon como a Forestalia.



VALLADOLID

La Junta tardará 7 meses en enviar el censo del lobo que pide Madrid para revisar su protección

Licita ahora el inventario de manadas por 115.000 euros / Galicia y País Vasco ya han enviado sus datos al Ministerio, que exige esa 'base científica' para sentarse a estudiar la rebaja de estatus que propone Bruselas

ESTHER NEILA VALLADOLID

La Consejería de Medio Ambiente vuelve a recurrir a una empresa privada para analizar «la ingente información» recabada durante los dos últimos años para elaborar el nuevo censo del lobo ibérico en Castilla y León. Acaba de licitar esa tarea y la futura adjudicataria tiene de plazo hasta octubre para presentar un informe clave para el futuro de la especie porque el Gobierno central ha condicionado la revisión del nivel de protección del cánido a los datos que remitan las autonomías. Con esa 'evidencia científica' sobre la mesa, el Ministerio de Transición Ecológica ha prometido estudiar si rebaja su estatus, como pretenden varias comunidades, entre ellas Castilla y León, y propone ahora también la Comisión Europea.

El departamento dirigido por Juan Carlos Suárez-Quiriones ha iniciado esta semana el procedimiento de adjudicación del informe final del nuevo censo autonómico, un actualizado inventario de las manadas y su distribución geográfica en la Comunidad que sustituirá al anterior, realizado hace diez años.

Los datos de Castilla y León se integrarán en el nuevo censo nacional, que servirá de base para revisar el nivel de protección del cánido, cuya caza está prohibida a ambos lados del Duero desde 2021. La inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lepsre), en septiembre de ese año, enfrenta desde entonces al Ministerio para la Transición Ecológica y las organizaciones conservacionistas con algunos gobiernos autonómicos y organizaciones ganaderas.

Hace unas semanas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, condicionó la revisión del actual estatus del lobo a los resultados del censo nacional, que previsiblemente estará terminado a finales de este 2024. Según Morán, a inicios de marzo sólo País Vasco y Galicia habían remitido sus resultados al Ministerio. Respondía así a las autonomías contrarias a mantener la total protección, que han avivado sus reivindicaciones en los últimos tres meses a raíz del pronuncia-



Ejemplar de lobo ibérico, especie protegida a ambos lados del Duero desde septiembre de 2021. JORGE SIERRA

miento de Bruselas. Entre ellas, Castilla y León, abanderada contra la protección del lobo, no ha enviado sus resultados ni está previsto que lo haga hasta dentro de siete meses. Según los pliegos publicados esta semana en la plataforma de contratación del sector público, la futura adjudicataria tendrá de plazo hasta el 21 de octubre de 2024

MEDIO AMBIENTE AVANZA QUE HAY 30 MANADAS NUEVAS

Saber cuántas manadas hay y dónde habitan es el punto de partida para el debate en torno al nivel de protección del lobo. El anterior censo regional determinó que había aquí 179 manadas (cada una está integrada por entre cinco y diez ejemplares) sobre un total de 297 en todo el país. Es decir, Castilla

y León es área de campeo del 60% de los cerca de 2.000 lobos de España. En los años 2017 y 2018, una revisión de ese censo rebajó el número de grupos en Castilla y León (computó aquí 155, tras detectar 27 nuevas), aunque esos datos no son comparables porque se nutrieron con

distinta metodología. A la espera de que la Junta haga públicos los esperados resultados de este tercer censo, desde la Consejería de Medio Ambiente ya han deslizado que el nuevo inventario contabiliza «una treintena de manadas más» que en el anterior estudio oficial realizado hace diez años, según avanzó el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.

tiene Dujó.

El nuevo censo regional 2022-2023 será el tercer estudio oficial del cánido. Como en las dos versiones anteriores, el estudio se erige como un detallado diagnóstico de la población, con datos de manadas y ejemplares desglosados por provincias y zonas, así como la evolución de su distribución en distintas áreas y espacios naturales o zonas de interés.

El informe final interpretará los datos recogidos durante dos años y con medios propios por la Consejería de Medio Ambiente: los agentes y celadores medioambientales han recopilado la información precisa durante los años 2022 y 2023, abarcando dos ciclos reproductivos.

La Junta asegura que los resultados de este tercer estudio serán comparables con los obtenidos en los dos censos previos (a partir de información de los años 2002-2003 y 2012-2013), aunque matiza que, en esta ocasión, se han reforzado las técnicas de muestreo.

En 2022, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal dictó una nueva instrucción que incorporó «la realización de estaciones de fo-

totrampeo (cámaras-trampa), habiendo previsto la ejecución de un importante esfuerzo de muestreo mediante esta técnica», según consta en los pliegos. Esa vía de obtención de información se suma así a «las técnicas de campo habituales y estandarizadas para la confirmación de la existencia de manadas de lobos y para detectar su reproducción, que son el rastreo de itinerarios buscando indicios, las estaciones de observación (esperas) y las estaciones de escucha (aullidos)».

La Junta justifica la necesidad de externalizar este trabajo por el volumen de la información objeto de análisis y la falta de profesionales en la Consejería de Medio Ambiente para realizar este trabajo. «Dada la ingente cantidad de información acumulada se precisa de la realización de un análisis e interpretación de los datos recabados que se traducirá en un informe de resultados del censo regional», explica el expediente de contratación.

La Consejería de Medio Ambiente «no cuenta con la solvencia técnica necesaria» y necesita «un equipo de especialistas que acrediten la experiencia suficiente» para desarrollar esta tarea. Fuentes del departamento añaden que contar con apoyo externo para monitorizar la información «es una práctica habitual» en otras administraciones públicas.

En los próximos meses, el informe de análisis se dará a conocer en cada provincia «durante una jornada de presentación de resultados», además de otra adicional en la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal. Esas jornadas «deberán contar con una exposición de resultados general del censo regional y con una parte específica para cada provincia», según consta en el encargo.

La licitación tiene un presupuesto total de 116.000 euros e incluye, además del informe del nuevo censo, el seguimiento posterior de la población del lobo ibérico. La duración del contrato es de 19 meses y cuenta con la financiación de fondos europeos.

Castilla y León realiza un censo oficial de su población lobera cada década. Además, la inclusión de la especie PASA A PÁGINA SIGUIENTE

DIARIO DE VALLADOLID. Lunes 2

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
en el Listado de Especies en Régimen Especial de Protección implica que la especie «debe ser objeto de un seguimiento específico por parte de las comunidades» para una evaluación periódica de su estado de conservación».

En Castilla y León, donde habita la población «más importante numéricamente y determinante para asegurar la viabilidad del conjunto de la población española», la Junta ya venía actualizando la información mediante varias fuentes de datos, como la aplicación Infolobo, que actualiza de forma continua la información de daños al ganado y mortalidad de la especie. La nueva licitación mantiene, como en la anterior, el seguimiento continuo de la especie «en el intervalo discurrido entre censos regionales».

Mejoras post-censo

Así, una vez finalizado el censo regional, la consultora deberá entregar otros dos informes a más tardar el 15 de octubre de 2025. La recogida continua de información irá revelando la confirmación de manadas y la detección de nuevos grupos post-censo. La empresa deberá analizar la evolución de las manadas teniendo en cuenta los datos recabados en la aplicación Infolobo durante el año reproductor 2024 (abril 2024-marzo 2025) y la mortalidad de la especie y de daños al ganado obrantes en la Dirección General de Patrimonio Natural, precisa el expediente.

En el informe del año reproductor «se identificarán las áreas donde resulta recomendable incrementar la vigilancia y control de los territorios que constituyen áreas de potencial expansión del lobo», añade. En caso de que la información recogida «no sea suficiente para confirmar manadas», el contrato contempla «que la empresa adjudicatara realice visitas de campo». Además de rastreo de itinerarios y estaciones de observación y escucha, se podrán aplicar técnicas complementarias como el fototrampeo y la recogida de muestras.

Áreas de control

El tercer bloque del contrato consiste en diseñar un sistema de muestreo que permita obtener a los cinco años información comparable con la de los censos oficiales, un «sistema de seguimiento de áreas control que englobe aproximadamente un tercio del tamaño de población y del área de distribución de la especie».

«En esta propuesta se identificarán los itinerarios realizados durante el último censo y las estaciones de fototrampeo y de escucha/observación realizadas, al objeto de que tanto la propia metodología como el esfuerzo de muestreo empleado resulte similar al empleado en el censo regional, permitiendo que la variabilidad de los datos obtenidos sea resultante únicamente de la evolución de la especie y no de factores metodológicos».

Los precios en origen han crecido un 69% y los compradores buscan alternativas

La sequía y el girasol amenazan al olivar

VIDAL MATÉ
Madrid

Los precios del aceite de oliva en origen se han incrementado un 69%, en lo que va de campaña (desde el pasado mes de octubre), según las últimas cifras del Ministerio de Agricultura. Esta evolución de los precios se ha traducido en una caída media de las ventas en el mismo periodo del 20%, descenso que supera el 30% en relación con las ventas de hace solo dos años. El aceite de girasol, por su lado, crece un 16%. A pesar de estos datos, la patronal de la industria aceitera no ve el panorama con pesimismo. Tiene en cuenta el incremento de los precios en un momento de crisis general en la demanda y cuando estima que los consumidores mantienen una gran fidelidad hacia el producto.

Del incremento de los precios se beneficia todo el sector, pero fundamentalmente las producciones elevadas intensivas, pese al aumento de costes. En la parte contraria, sin embargo, está el olivar tradicional. Es mayoritariamente en secano y de montaña, con producciones más bajas, con los efectos de la vecería (un año de buena cosecha y mala la siguiente), con costes más elevados por kilo y que, en muchos casos, abocan a los abandonos del cultivo con un efecto negativo sobre el medio ambiente y la actividad económica en el territorio. De una superficie de 2,7 millones de hectáreas, 1,9 millones son de secano, con dominio del tradicio-

nal y unas 878.000 de regadío.

Hay debate sobre el olivar tradicional y la calidad de los aceites. Se viene considerando el tradicional al secano con no más de 180 plantas viejas por hectárea, generalmente en tierras con pendiente de más del 20% y con rendimientos muy bajos que, en el mejor de los casos, pueden situarse en el entorno de los 3.000 kilos frente a los 12.000 de los olivares súperintensivos. Sobre si la calidad del aceite es o no superior en el olivar tradicional por sus bajos rendimientos, desde el olivar intensivo se estima que la diferencia no se halla solo en el árbol y en el sistema de cultivo, sino también en su elaboración.

Frente a una producción media entre 2019 y 2023 de 1,2 millones de toneladas, las cosechas de los dos últimos años (con 666.000 y menos de 800.000 toneladas respecto a la campaña actual) son excepcionalmente bajas, consecuencia de la sequía y de la falta de agua de riego para una gran parte del olivar con posibilidades de utilizarlo, al margen de las mayores superficies de cultivos de regadío en espaldera.

En estas circunstancias, los precios en origen se han disparado hasta acercarse a los nueve euros el kilo para un virgen extra, el kilo es casi un 10% más caro que el litro, los 8,5 euros para un aceite virgen y los ocho euros para un aceite lampante que debe refinarse para su consumo. Estos precios se traducen en cifras de hasta los 14 euros para un virgen extra de alguna marca de



Manifestación de agricultores en la Puerta de Alcalá de Madrid el día 6. EDUARDO PARRA (EP)

Las cosechas de los dos últimos años son excepcionalmente pobres

Lo que se cobra tras recolectar el virgen extra crece hasta nueve euros el kilo

fabricante y de los diez euros para marcas de la distribución, frente a una media de dos euros por litro para el aceite de girasol.

Consecuencia de todo ello, por la falta de oferta nacional y unas importaciones que no llegan a las 200.000 toneladas, las ventas en el mercado interior han registrado un descenso: de unas cifras en las campañas de 2020 y 2022 de entre 545.000 y 585.000 toneladas a registros en los dos últimos años estabilizados en unas 368.000 toneladas, con descensos superiores al 30%.

Esta situación se repite en el caso de las exportaciones, con caídas desde cifras muy por encima del millón de toneladas hasta menos de 700.000 en la última campaña. Este espacio dejado por la caída en la venta del aceite de oliva solo ha sido ocupado parcialmente por la venta de aceite de girasol y de otras semillas, no de colza y de soja. Esto implica un ajuste en el consumo global de los aceites.

En el caso de las empresas, en este escenario la firma líder mundial en el aceite de oliva, Deoleo, solo aumentó su facturación el 1% a pesar de la fuerte subida de los precios que califica de históricos desde que se tienen registros.

Esto supone una fuerte caída de volumen, cifra que no facilita tradicionalmente la empresa, con pérdidas de 34 millones de euros. Cabe señalar que el grupo arrastra aún una deuda de 120 millones, por lo que en los últimos años está afrontando un contrato de refinanciación con varias entidades con pagos que afectan a sus resultados.

En la cooperativa Dcoop, líder en el sector con una producción media de unas 200.000 toneladas en condiciones de normalidad climática, los precios han supuesto una reducción en las ventas de envasadas del 5%. Con la subida de los precios mantiene una facturación superior a los 1.000 millones de euros.

Agricultura

Los ministros de Agricultura de la UE se reúnen mañana en Bruselas con un objetivo prioritario: dar respuesta a las demandas de los agricultores y ganaderos comunitarios expresadas mediante las protestas que llevan protagonizando desde hace más de tres meses en muchos de los Estados miembros. Por otro lado, volverán a analizar la situación de los mercados de los principales productos que sufren más perturbaciones, como es el caso de los cereales. En el primer grupo, los debates se centrarán en el paquete de propuestas que ha presentado la Comisión Europea el pasado día 15, que incluye una revisión del reglamento sobre los planes estratégicos nacionales de la PAC que han elaborado los Estados miembros. También estudiarán un documento de trabajo, con un calendario para reforzar la posición de los agricultores y ganaderos en la cadena de suministro alimentario. En el segundo bloque destaca el análisis sobre las importaciones ucranianas de cereales. Mientras tanto, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y los expertos agrícolas de los Estados miembros trabajan contra reloj para adoptar sin modificarlas las propuestas de la Comisión antes de que acabe abril, cuando los eurodiputados celebrarán su último pleno.

En paralelo, en España, cuando se van a cumplir dos meses desde que comenzaron las movilizaciones, Luis Planas y su equipo más directo no han presentado todavía a los representantes del sector unas propuestas formales y por escrito que sirvan de base para negociar y atender las reivindicaciones que han planteado las tres organizaciones agrarias reconocidas (ASAIA, COAG y UPA), la Unión de Uniones (pendiente de reconocer) y las diversas plataformas que han surgido en la mayoría de las provincias, configurando así una especie de «ejército de Pancho Villa». El único papel que hay sobre la mesa es el que han remitido los servicios de a las comunidades autónomas con una serie de propuestas para flexibilizar el Plan Estratégico Nacional (PE-PAC). Sin embargo, en él no se abordan las otras reivindicaciones que afectan al Ministerio, ni tampoco las relativas a los otros departamentos del Gobierno,

El análisis



César Lumberas

Y Planas sigue de perfil

► Agricultura no ha puesto aún encima de la mesa un plan para negociar con el campo pese a las recientes revueltas

especialmente a los Ministerios para la Transición Ecológica, el de Hacienda, el de Trabajo y también el de Seguridad Social. Las organizaciones agrarias habían planteado diversas peticiones que han caído hasta el momento en saco roto.

Algunas de ellas se refieren a los bajos precios en origen que se registran en algunos productos. Un ejemplo claro son los cereales. En el mercado interior español las cotizaciones son en estos momentos entre un 25 y un 30 por ciento más bajas que hace un año. En los últimos doce me-

ses la tendencia ha sido claramente a la baja como consecuencia de la confluencia de una serie de factores que se pueden resumir en dos: abundancia de la oferta procedente del exterior y a precios muy competitivos. Y eso a pesar de la escasa cosecha nacional. Sin embargo, durante la última semana, la situación se ha dado la vuelta y abundaron las subidas en la mayor parte de las lonjas, especialmente a partir del martes. A ello no son ajenas las medidas que se pretenden adoptar para frenar la entrada de cereales procedentes de Ucrania

Mientras los cereales están al alza, el aceite de oliva lleva un mes orientado a la baja

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

que tienen previsto adoptar en Bruselas y también la imposición de aranceles a las mercancías de Rusia y Bielorrusia anunciadas a finales de la semana pasada por parte de la Comisión Europea.

Y, si lo cereales están al alza, aunque partiendo de niveles de muy bajos, las cotizaciones en origen del aceite de oliva llevan un mes orientadas a la baja de forma muy clara, aunque, eso sí, desde unas cifras que ha sido históricas. Ello se ha debido en gran parte a las lluvias que han caído en los últimos días en las principales zonas productoras, especialmente en Andalucía, que han hecho que los olivos se recuperen en parte de la sequía de las dos últimas campañas. Ahora toca esperar que la floración de los árboles no se vea afectada por las altas temperaturas. Los meses de abril y mayo van a ser claves y nos darán una idea de cual puede ser la producción de la campaña 2024-25. De momento, los precios en origen del aceite virgen extra hace ya varias semanas que perdieron el nivel de los 9.000 euros por tonelada y ahora se sitúan entre 8.100 y 8.500 euros, mientras que los vírgenes cotizan por debajo de los 8.000 euros por tonelada. Ahora toca esperar que estos recortes se trasladen a los precios en destino que pagan los consumidores.

ALBERTO R. ROLDÁN



48 CASTILLA Y LEÓN

LUNES, 25 DE MARZO DE 2024 ABC

La «angustia» de las secuelas del 'covid de las vacas': «De 6 partos, 3 muertos»

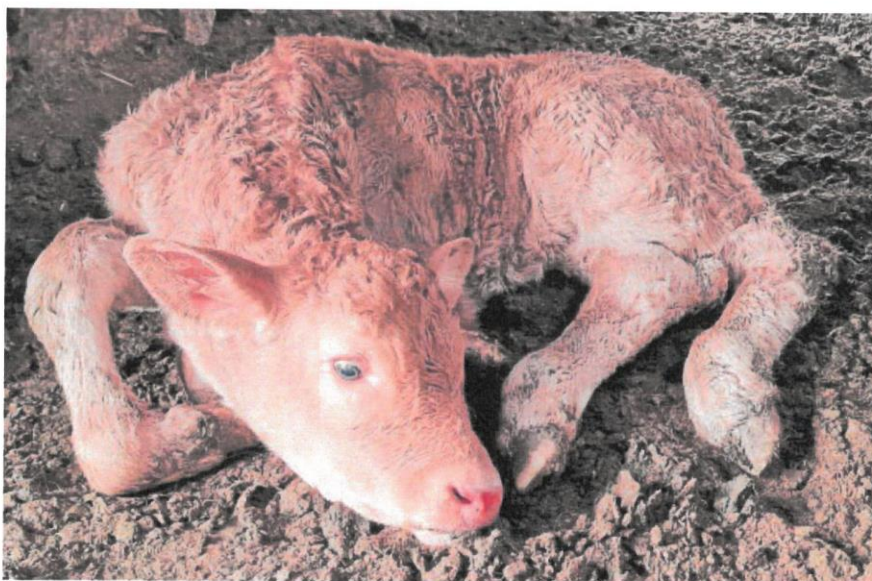
► Los ganaderos claman ante su «impotencia» por los efectos en las crías de las reses infectadas el pasado verano por la EHE

ISABEL JIMENO VALLADOLID

«Angustia e impotencia». Son las palabras con las que definen su día a día Pablo y Noelia, dos ganaderos de vacuno de Ávila, desde que hace algo más de mes y medio comenzó la paridera y empezaron a ver «cosas extrañas». Ya tenían la mosca detrás de la oreja desde que el mosquito Colicoides empezó a extender entre el vacuno el verano pasado la hasta entonces desconocida Enfermedad Hemorrágica Epizootica (EHE), llevándose por delante la vida de media docena de sus reses y dejando muy tocado conjunto de la cabaña. Y sus peores presagios se han comenzado a cumplir.

«Tiritando» entran en la nave sólo de pensar lo que se pueden encontrar. Al abrir la puerta, sus ojos quedan clavados ante la misma escena. Ahí sigue una de las vacas lamiendo a su cría. Hace dos días que ha nacido y no logra levantarse, cuando lo habitual es que en menos de una hora ya esté en pie. Ha nacido con vida, pero está muy débil. «Cada día que pasa sin levantarse, menos posibilidades tiene de hacerlo», asumen con resignación. «Se te cae el alma a los pies», coinciden con la voz quebrada de ver a sus animales así. «Mientras viva, seguiremos luchando, pero tirando dinero...», subraya Noelia, quien incide en que «el corazón te impide» dejar morir a los terneros por mucho que sus posibilidades sean escasas y los vean «sufriendo». Este «vive porque está sondado», puntualiza. Ni lo imaginaba, pero ya casi es capaz de hacerlo «con los ojos cerrados», explica, porque es inasumible llamar a un veterinario «cada ocho horas». Así, con biberones «porque no toman la leche» debido a su fragilidad y una boca llena de úlceras en las que el alimento escucece, ayudando a que traten de levantarse... pasan su día a día. Y la noche. «Pero da igual...». Desde el teléfono móvil, Pablo tiene acceso a las cámaras que vigilan a cada animal en la granja. Ni dos horas seguidas logra dormir del tirón, y en cuanto nota que una madre puede ponerse de parto, allá va...

Marzo está resultando dramático. En menos de veinte días, «de seis partos, tres terneros muertos». «La mitad...» Y los que viven, «están muy afectados. Nacen muy débiles». Ojos rojos, al igual



que las madres en verano enfermas, morros con pupas que se hacen costras, llagas en la boca que dificultan la lactancia en unas ubres más «cortas de leche», patas que no se sostienen... «Es como si tuviesen falta de maduración», tratan de describir lo indescriptible y «¡jamás» vivido hasta ahora.

«La misma pelea»

Son las crías de aquellas vacas que estaban preñadas de entre dos y cuatro meses el pasado verano, «cuando el feto es muy sensible» y la EHE hizo estragos. Ya entonces hubo abortos, recuerda, y ahora con la paridera padecen las secuelas. La escena de esos animales que ni se levantaban, tenían los ojos ro-



LAS SECUELAS EN LOS TERNEROS

Los animales que nacen vivos lo hacen «muy débiles», dicen los ganaderos, y pasan días hasta que logran levantarse –si lo consiguen– cuando lo habitual es que en menos de una hora estén en pie. Arriba, dos ejemplares afectados, con el morro también tocado y ojos rojos. Suplen con biberones la leche de la madre ya que no maman debido a las llagas en la boca por lo que no comen // ABC

Muchos positivos y el 60% de la cabaña inmunizada

I. J. VALLADOLID

En la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural reconocen que hay «preocupación» por los efectos que están teniendo en la cabaña las infecciones del pasado verano por la Enfermedad Hemorrágica Epizootica (EHE) y por cómo llegará el próximo estío. Incluso antes, porque las altas temperaturas con las que arrancó la primavera puede favorecer que el mosquito culicoides 'despierte' y

comience una propagación, cuyo primer caso en Castilla y León el año pasado se detectó a principios de agosto en la provincia de Salamanca.

Desde el departamento de Gerardo Dueñas aseguran que son «conscientes» de los problemas con los partos y malformaciones en los terneros, lo que «por desgracia, sólo confirma las graves consecuencias de la infección por EHE del verano pasado».

Según apuntan, en este momento

«se siguen monitorizando» las explotaciones. Así, por un lado, la realización de test Elisa al ganado arroja que, hasta la fecha, entre un 60 y un 70 por ciento de la cabaña de bovino está inmunizada de la enfermedad. Eso sí, al ser nueva, los profesionales del sector expresan su incertidumbre sobre hasta qué medida eso evitará un verano desazonador como el pasado. Además, al menos otro 30 por ciento de los animales no tiene anticuerpos.

Por otra parte, también están realizando pruebas PCR que reflejan «un alto número de positivos» en la EHE. A la luz de estos datos y lo vivido, en la Consejería reconocen su «preocupación» y vuelven a exigir al Ministerio de Agricultura «que deje de mirar para

ABC LUNES, 25 DE MARZO DE 2024



jos, el hocico con heridas... se repite con las crías que han completado el embarazo, pues ya ese conocido como el 'Covid de las vacas' también provocó muchos abortos, recuerdan. Ahora están ante «la misma pelea» que el estío pasado y temblando sólo de pensar que en breve llegarán de nuevo los meses de calor, la irrupción del temido mosquito... Y siguen sin vacunas. Los tratamientos, los que permiten aliviar el dolor, que entre los propios ganaderos se van trasladando dado el desconocimiento, porque la afección es compartida. «Como con el Covid», advierten.

A Oscar, de la provincia de Salamanca, la enfermedad la ha vuelto a tocar de lleno, con gran afección también para su salud, hasta el punto de que los valores su leucemia crónica le han «descontrolado». Vacas que pierden los casos de las pezuñas, sementales ya estériles tras pasar la EHE... entre otras secuelas y «consecuencias catastróficas» que denuncian en el sector, que se

otro lado e impulse de forma inmediata una vacuna contra la EHE». Así lo planteará la Junta al departamento de Luis Planas -al que trasladan los datos de monitorización sobre la enfermedad en Castilla y León- en la próxima reunión del comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria prevista para abril.

Desde la Consejería recuerdan, además, que el Ministerio «no ha aportado un solo euro» para hacer frente a los daños de la enfermedad, mientras que la Junta «sí» acordó casi seis millones «para compensar, en la medida de las posibilidades» los daños. De cara a este año, si la situación obligase a articular apoyos a los ganaderos por este motivo, el compromiso, recalca, es contar con fondos «si es necesario».

La EHE deja cifras «inéditas» de animales muertos

Fue sobre todo en verano, cuando el mosquito picó con más fuerza, cuando los estragos de la EHE se notaron más, provocando «cifras inéditas» en el seguro de Retirada y Destrucción de Animales Muertos, apuntan desde Agrosseguro. Una situación «totalmente extraordinaria», ante la que valoran que han «realizado puntualmente y sin incidencia» su labor -recepción de avisos, traslado a la empresa gestora que se encarga de recoger los cadáveres y su tratamiento- y prestación del seguro. Y los datos revelan la incidencia en la cabaña ganadera. Si en 2022 Agrosseguro recibió y gestionó 252.310 solicitudes, en 2023 se elevaron a 256.714, un 1,75 por ciento más. Que el mayor impacto de una enfermedad hasta entonces más común en cérvidos lo sufrió el bovino lo demuestra que el alza de reses muertas fue mayor. Un 6,7 por ciento aumentó de un año a otro, pasando de 93.204 ejemplares retirados a 99.517. La cabaña era en noviembre un 5,4 por ciento inferior a mayo. Por las vacas muertas, Agrosseguro pagó 5,3 millones de euros de los 12,1 totales desembolsados.

queja también de la escasa atención por parte de la administración.

«Mejor no saber»

«No dejamos que mueran. Somos muy peleones», inciden Noelia y Pablo. En ellos les va literalmente también su vida. Una gran inversión para una granja totalmente modernizada puesta en marcha con toda la ilusión, pero ahora no salen «de la desilusión». «Es muy difícil», lamenta él, «ganadero de toda la vida». «Esto no se elige. Esto se mama», señala para explicar por qué siguen «en algo donde estás perdiendo dinero». Le ha quitado el apetito, vive en constante estrés... «Tu negocio tiene que ser viable», clama. En este momento, no se sostiene. Y aunque «es mejor no saber» las pérdidas, asume que los números no cuadran. Por cada vaca muerta, 750 de indemnización, cuando en el mercado «puede valer 4.000», más de 80 euros cada saco de leche para suplir la lactancia; un ternero cebado alcanza entre 2.000 y 3.000 euros en matadero... Las sumas en muertos y medicamentos que restan en su cuenta de resultados. «Tienes una vaca comiendo todo el año -unos cuatro kilos de pienso y 25 de forraje por res- y no produce nada», advierten estos abulenses de vacuno de carne. Y auguran, ese menor número de reses se notará en el mercado y en el precio para los consumidores...

3

SORIA

Soria cuenta con 2 empresas con certificado Halal apto para musulmanes

SORIA

Dos empresas de la provincia de Soria forman parte del total de 32 en Castilla y León que cuentan con el certificado emitido por el Instituto Halal, entidad encargada de ratificar en España y Latinoamérica los bienes y servicios aptos para el consumo de los musulmanes. En 2017, eran 21 en la Comunidad las que tenían la marca de garantía que hace referencia a diferentes sectores dado que incluye el ámbito alimentario, del turismo, la banca y las finanzas, los fármacos, la moda y los cosméticos.

Según la información recogida por la Agencia Ical y facilitada por el Instituto Halal, con sede en Córdoba, existen unas 465 empresas certificadas en España, con Andalucía y Cataluña como aquellas autonomías que acogen a la mayor parte de ellas. Y es que, la población musulmana en 2022 se cifró en los 2,2 millones en el conjunto del país, siendo de 45,780 en la Comunidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por provincias, Zamora se posiciona a la cabeza, al contar con nueve empresas certificadas, seguida por Valladolid, con siete, León, con cuatro, y Palencia, con tres. A la cola se encuentran Soria, Segovia y Ávila, con dos en cada provincia, así como Salamanca, que sólo cuenta con una certificación, según los datos facilitados por la entidad responsable, donde los empleos directos generados por las empresas certificadas por Instituto Halal en Castilla y León se cifró en más de 4.000 personas. Las empresas cuya actividad se centra en el sacrificio de animales y el despiece son aquellas que mayor número contabilizan, con 15 en el conjunto de Castilla y León, mientras que las de lácteos contabilizan cinco empresas.